

Dinámicas socioambientales y productivas en la zona norte de El Salvador: La ribera norte del Humedal Cerrón Grande



Este documento es el resultado del Programa Dinámicas Territoriales Rurales, que Rimisp lleva a cabo en varios países de América Latina en colaboración con numerosos socios. El programa cuenta con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Se autoriza la reproducción parcial o total y la difusión del documento sin fines de lucro y sujeta a que se cite la fuente.

Diagramación: Leonor González

Fotografías: Archivos de Fundación PRISMA



Esta publicación está liberada bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-
No comercial-Compartir Obras Derivadas Igual.
Para mayor información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CL

© Fundación PRISMA, Mayo 2011.

ISBN: 978-99923910-9-9

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero institucional recibido por PRISMA de parte de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y de Fundación FORD.

Dinámicas socio ambientales y productivas en la zona Norte de El Salvador: La ribera norte del Humedal Cerrón Grande

Ileana Gómez y Rafael Cartagena

Índice

Sigla	1
Introducción	3
Delimitación del territorio	6
Elementos de conformación	6
Factores de la identidad territorial	8
Las dinámicas socioeconómicas del territorio	9
Cambios sociales asociados a la tercerización de la PEA	9
Cambios en la estructura ocupacional de la PEA en el Cerrón Grande (1992-2007)	10
Dinámicas del Capital Natural	12
Estrategias de medios de vida: pesca, agricultura y ganadería	14
Comercialización de la producción agropecuaria y pesquera	19
Cambios Institucionales y su incidencia en las dinámicas territoriales	20
La agenda oficial y “externa”	20
La construcción de una agenda endógena para el desarrollo del territorio	23
Sinergias entre agenda endógena y externa	28
Respuestas a las hipótesis	30
Referencias	33

Siglas

ACACRESCO	Agencia de Desarrollo Económico Local
ACOCTISO	Asociación de Organizaciones de la Cuenca de los Ríos Grande de Tilapa y Soyate
ACOPES	Asociación Comunal de Pescadores
ADEL	Agencia de Desarrollo Económico Local
ADESCO	Asociación de Desarrollo Comunal
AMUSNOR	Asociación de Municipalidades de Servicios del Norte
ASECHA	Asociación Ecológica de Chalatenango
BMI	Banco Multisectorial de Inversiones
BOLPROES	Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador
CACH	Comité Ambiental de Chalatenango
CCR	Catholic Relief Services
CEL	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
CENDEPESCA	Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura
CIHCG	Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande
CLN	Carretera Longitudinal del Norte
CND	Comisión Nacional de Desarrollo
COFICOL	Sistema de Créditos
CORBELAM	Comité Representativo de Beneficiarios de La Montaña
CORDES	Fundación para la Cooperación y Desarrollo Comunal de El Salvador
DGRNR	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
DIGESTYC	Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador
FIS	Fondo de Inversión Social
FISDL	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
FOMILENIO	Fondo del Milenio
FUNDAMUNI	Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador

Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente

FUNDE	Fundación Nacional para el Desarrollo
FUNPROCOOP	Fundación Promotora de Cooperativas
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MCC	Corporación del Reto del Milenio
MEA	Municipalidades en Acción
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
ONG	Organización no Gubernamental
PADEMA	Plan Departamental de Manejo Ambiental
PDL	Programa de Desarrollo Local
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROCHALATE	Proyecto de Rehabilitación para el Desarrollo de Chalatenango
PRODERE	Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados en Centroamérica
UAMPS	Unidades Ambientales de Producción y Manejo Sostenible

Introducción

Esta investigación se enmarca dentro del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de RI-MISP, el cual pretende avanzar hacia una propuesta teóricamente consistente y empíricamente validada sobre los determinantes de las dinámicas territoriales rurales en América Latina y a partir de ellos derivar opciones de política pública que contribuyan a un desarrollo con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

El estudio sobre las dinámicas ambientales y productivas en la ribera norte del Humedal Cerrón Grande se propuso los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar los actores y coaliciones sociales que se han ido formando en el territorio en el marco histórico del cambio económico y político; 2) Analizar la institucionalidad formal e informal y las políticas de desarrollo territorial que han incidido en la dinámica social, económica y ambiental del territorio; 3) Caracterizar geográficamente la dinámica socio ambiental y productiva del territorio en relación a la degradación o recuperación de sus principales activos naturales, cambios de uso de suelo etc.; 4) Caracterizar la composición de los principales servicios ecosistémicos del territorio de acuerdo a los niveles de autoabastecimiento, producción y reconocimiento externo y los arreglos institucionales que los soportan.

En el transcurso de la investigación se incorporó el análisis de las dimensiones de género en el territorio para obtener información más completa sobre los actores y coaliciones sociales, los cambios institucionales y la distribución y acceso a activos.

El presente informe resume los hallazgos correspondientes a los objetivos 1, 2 y 4. La caracterización geográfica (objetivo 3) se aborda en el

documento sobre La dinámica agroambiental de la zona norte del Cerrón Grande (Díaz, Escobar, Gómez y Morán, 2010).

Metodología

Para la realización de la lectura sobre las dinámicas territoriales se usaron los siguientes principios teórico-metodológicos:

Análisis de dinámicas macro y su expresión territorial: Ello permite entender cómo las fuerzas de la globalización articuladas con los poderes económicos presentes en los Estados, definen las direcciones del cambio económico y social (declinación del agro, auge de los servicios y la economía urbana, migración interna y externa, urbanización, etc.). La expresión territorial diferenciada de esos cambios permite comprender la dinámica de la pobreza y su relación con el uso de los recursos naturales en el territorio. Esta lectura se complementa con las lecturas macroeconómicas enfocadas en la evolución de las variables macroeconómicas o sectoriales.

Análisis de respuestas territoriales: a) entender los cambios en las estrategias de vida de los hogares y su relación con el manejo de los recursos naturales. b) entender los tipos de acción colectiva desde los ámbitos económico, social y cultural; y los arreglos institucionales que inciden en la dinámica del territorio, los cuales pueden incluir las formas de negociación, generación de acuerdos, resistencia o defensa del territorio y manejo de conflictos.

Las técnicas utilizadas para la recolección de información primaria fueron entrevistas focalizadas y abiertas, observación participante y talleres participativos. Por otra parte, se utilizó

información primaria en la forma de microdatos recolectados por los censos agropecuarios y de población. El uso de información secundaria fue bastante limitado, pero se aprovechó alguna información contenida en diagnósticos y estudios previos realizados en Chalatenango.

La selección del territorio

La investigación se enfoca en 8 municipios del departamento de Chalatenango ubicados en la ribera norte del Humedal Cerrón Grande: Tejutla, El Paraíso, Santa Rita, Chalatenango, Azacualpa, San Luis del Carmen, San Rafael y San Francisco Lempa. Dicho territorio suma 410.6 Km², con una población de 66 mil 782 personas, 57% habitantes de zonas rurales.

De acuerdo con la tipología de las dinámicas territoriales rurales en El Salvador durante el período 1992/2007 (Damianović et al., 2009), existen 28 municipios que han experimentado un cambio positivo, es decir, han incrementado en ingreso per capita, reducido la pobreza y evidencian una mejor distribución del ingreso. En la ribera norte del Cerrón Grande se encuentran dos de esos municipios: Santa Rita y Azacualpa. Los otros seis presentan mejoras en el ingreso per capita y la reducción de la pobreza. Se trata, por lo tanto, de un territorio WWL¹ según la nomenclatura usada por Damianović et al. (2009). La selección del territorio permitió indagar los factores que llevaron a un mejoramiento de los ingresos y reducción de la pobreza, a la vez que las diferencias entre municipios permitieron contrastar los factores que explicarían el desempeño WWL de los municipios de Azacualpa y Santa Rita.

La proximidad de estos municipios al Humedal Cerrón Grande ofrecía la oportunidad de enri-

¹ W (win) indica un cambio favorable estadísticamente significativo en el tiempo y L (low) indica los cambios nulos o negativos.

quecer la investigación con una lectura sobre las dinámicas ambientales asociadas al humedal. Esto ocurre en un Departamento que se distingue del resto del país por la existencia de procesos de acción colectiva que involucran actores gubernamentales y de la sociedad civil en la elaboración de propuestas, diagnósticos y acciones concretas para enfrentar la degradación de los recursos naturales y la pobreza asociada (Mora y Román, 2000).

Lógica y estructura del informe

El informe se ha organizado para exponer la relación entre las dinámicas macro, su expresión territorial y las respuestas de los actores locales. El documento consta de cuatro partes. La primera se ocupa de las dinámicas de larga duración o estructurales que han configurado el territorio hasta inicios de la década de 1990, incluyendo las configuraciones de la identidad territorial.

Lo anterior constituye el contexto de los procesos analizados en la segunda parte, es decir, la dinámica socio-productiva a partir de la década de 1990. Es aquí donde se abordan la tercerización de la economía local y las respuestas que se observan en sectores más vinculados a la base de recursos naturales. En la tercera parte el objetivo es comprender la institucionalidad que actúa en el territorio: las intervenciones del gobierno central y de la cooperación internacional, por un lado y la agenda surgida de la acción colectiva de la sociedad civil y gobiernos locales.

La parte final del documento presenta las conclusiones del estudio, para lo cual se exponen los resultados de la investigación en la forma de respuesta a las tres hipótesis planteadas:

H1: El modelo de desarrollo económico aplicado en El Salvador desde la década de los noventa, ha tenido impactos positivos en el capital

natural y ha favorecido las dinámicas ambientales y productivas del territorio, fortaleciendo las estrategias de vida de población y permitiendo reducir la pobreza e impactar positivamente en los ecosistemas.

H2: El capital social del territorio –expresado en sus capacidades organizativas, en las coaliciones sociales y en los arreglos institucionales existentes– no ha tenido la fuerza suficiente para incidir en las características y efectos de los mega-proyectos, de tal forma que éstos sean

motores de una dinámica de crecimiento endógeno con inclusión social y sustentabilidad ambiental, porque no ha existido voluntad política, para institucionalizar las propuestas surgidas del territorio.

H3: Las diferencias entre los territorios respecto a la distribución en los ingresos se explican por el éxito de la gestión municipal y las políticas y proyectos ejecutados en el territorio, independientemente del flujo de remesas y de su capital natural.



Tierra de añil, jornaleros y emigrantes

Desde finales del siglo XIX la zona norte de El Salvador se configura como un territorio proveedor de fuerza de trabajo para las cosechas de los cultivos de exportación (café, algodón y caña de azúcar). Esta dinámica marcó al territorio hasta finales de los años setenta cuando empieza un profundo y acelerado cambio económico que ha significado el desplazamiento de la agroexportación tradicional como principal sector generador de divisas y empleo en el país, expresado en un menor peso relativo en la producción nacional.²

El desplazamiento de la agroexportación no sólo significó el colapso de los empleos y salarios agrícolas en las cosechas de café, algodón y caña de azúcar, a ello sumó la caída en los precios reales de los cultivos de subsistencia (maíz y frijol) resultando un fuerte colapso de los medios de vida de los pobres rurales.³ En este contexto, los pilares de la economía de las familias campesinas de la zona norte se derrumbaban. Al mismo tiempo, la zona se convertía en uno de los principales escenarios de la guerra interna en El Salvador (1979-1991) lo que desarticuló la vida productiva y social, produjo desplazamientos masivos de población, abrió la migración al extranjero y volvió inhabitable buena parte del territorio.

² En 1978 el sector agropecuario representaba el 37% en la estructura productiva (precios corrientes) cayendo a un poco más del 10% en el 2008. El rol de la agroexportación en la generación de divisas cambió de representar el 67% en 1978 a tan sólo 4% en el 2006. En cambio las remesas, que en 1978 representaban sólo el 9% del total de divisas del país, en el 2006 aportaron el 55% (Rosa, 2008).

³ En el 2007, el empleo rural fue tan sólo 1% mayor del registrado en 1980. Mientras la participación de los empleos agropecuarios era mayoritaria en 1980 (61%) para el 2007 los empleos no agropecuarios ya representaban 59%; resaltando el empleo generado por el comercio, la industria y la construcción en las zonas rurales. (DIGESTYC, 2008)

Elementos de conformación

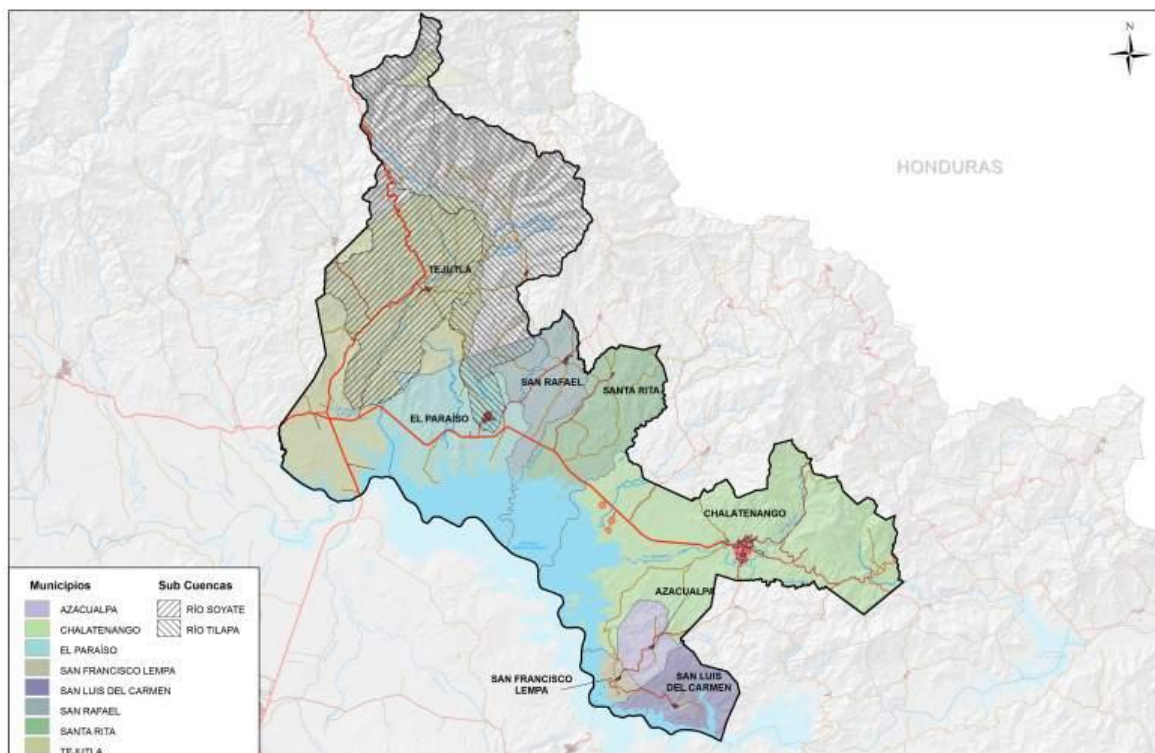
Los municipios de la ribera norte del Humedal Cerrón Grande lo forman ocho municipalidades del departamento de Chalatenango: Tejutla, El Paraíso, Santa Rita, Chalatenango, Azacualpa, San Luis del Carmen, San Rafael y San Francisco Lempa.⁴ Estos municipios tienen elementos comunes que han estructurado el territorio:

- a) Impactos en los medios de vida por la pérdida de tierras de cultivo y vivienda debido a la construcción de la represa hidroeléctrica Cerrón Grande en 1976. La formación del embalse es un elemento que ha estructurado al territorio en términos espaciales y sociales. El embalse, de 135 km de superficie inundó buena parte de las mejores tierras cultivables de Chalatenango, desplazando 13 mil pobladores que recibieron bajos montos de indemnización. En la memoria histórica de la población de Chalatenango esta experiencia ha sido vivida como un despojo de su vida y territorio.
- b) Conflicto y desplazamiento de población como consecuencia del conflicto armado de los años ochenta. Aunque la zona no fue afectada directamente por los combates, la migración hacia la capital o al extranjero se convirtió en una salida ante la inseguridad por la guerra, la crisis del agro y la pérdida de tierras por la inundación producida por la represa. En el caso de los municipios de Azacualpa, San Francisco Lempa y San Luis del Carmen, esto ha repercutido en la pérdida de buena parte de su población.

⁴ El área de estos ocho municipios es de 410.6 Km².

Mapa 1

Ribera Norte del embalse Cerrón Grande y sub cuencas del río Soyate y Grande de Tilapa



Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la región de Chalatenango.

- c) Incidencia de macroproyectos para el desarrollo logístico: La Carretera Longitudinal del Norte (CLN) es un macroproyecto que apuesta al fortalecimiento de la interconectividad de El Salvador con la región Centroamericana. Con la carretera, la zona norte aumentará su conectividad, incidiendo en el potencial de desarrollo económico, facilitando las relaciones comerciales con otros centros urbanos y mayor accesibilidad para su población a bienes y servicios. Pero la falta de instrumentos para el ordenamiento territorial e instrumentos fiscales, que podrían captar plusvalía del suelo por parte de las municipalidades y del Estado, deja la puerta abierta a la especulación de compra-venta de tierras y crecimiento urbano desordenado.
- d) Esfuerzos sociales para el manejo de recursos comunes: Desde la posguerra (1992) las organizaciones territoriales han generado sus propias propuestas para estos desafíos. Destaca el impulso de opciones propias para el mejoramiento de sus estrategias de medios de vida y manejo de recursos de importancia nacional, específicamente en la zona del Humedal Cerrón Grande.



Chalatenango ha desarrollado un nuevo tipo de identidad territorial basado en la organización social participativa. La actividad de organizaciones religiosas y el surgimiento del movimiento campesino desde los años sesenta cohesionan a las comunidades rurales y la convierten en una de las zonas con mayor capacidad de organización social en el país.⁵

Durante la época del conflicto armado, la red de apoyos sociales vinculados a las organizaciones de base del movimiento campesino se mantiene con un bajo perfil dentro del país, por el desplazamiento y represión a la población civil. Sin embargo, la praxis de organización se reproduce en los campamentos de refugiados que se establecen en el territorio hondureño. Al finalizar la guerra, las organizaciones comunitarias cobran relevancia formando las bases de las estructuras organizativas que se expresan en la actualidad. (Gómez, García y Larios, 2004)

En la post guerra, los actores reivindican el rol del territorio como proveedor de importantes servicios ecosistémicos, ya que cuenta con "potencialidades que podrían romper con la marginalización", entre ellas "los recursos naturales forestales, climáticos, hídricos, tanto para la producción piscícola, como eléctrica" (PRODE-

RE, 1995). Este es un elemento que termina incorporándose a la identidad territorial. La acción colectiva en torno a la reconstrucción implicó una redefinición del rol del territorio y permite que los habitantes desarrollen la "conciencia de poseer recursos vitales para el país, agua del río Lempa y generación de electricidad y por los cuales no reciben una compensación departamental que pueda utilizarse en el desarrollo de su región". (CND, 1998a)

La identidad territorial se mueve en torno a dos elementos de cohesión: a) los referentes de la historia contemporánea que tienen que ver con las huellas sociales de la guerra: los escenarios de enfrentamientos, los héroes y heroínas comunitarias o religiosos y las históricas masacres de población civil; son personas y eventos recordados y ritualizados en celebraciones, murales o cantos populares; b) un proceso de formación de la conciencia de contar con recursos naturales estratégicos no sólo para la zona Norte o el departamento, sino para el país. Esta conciencia y la praxis de organización social han permitido la formación de coaliciones multiactores, integrando sectores que una vez estuvieron enfrentados entre sí.

⁵ Según PNUD (2003) las identidades regionales en El Salvador son bastante difusas y no generan un sentido fuerte de pertenencia entre los individuos, esto es así porque las regiones no cuentan con un sistema de autoridad propio ni un sistema simbólico que las caracterice. Sin embargo, algunas regiones, como Chalatenango, logran generar un sentido de identidad, por una serie de características propias y una historia que lo identifica.



Los ocho municipios del territorio en estudio tenían al momento del Censo 2007 una población de 66 mil 782 personas, apenas 2194 personas más que las registradas por el Censo de 1992. Mientras la población se incrementó en tres municipios y se mantuvo estable en otro más, cuatro municipios registran una pérdida de población. El porcentaje de población rural era de 57%, mientras que la densidad fue de 162.6 personas/Km², bastante menor al resto del país.

Entre 1992 y 2007, el territorio en estudio pasó por una pequeña disminución en el número de personas económicamente activas (PEA) y por la “descampesinización” y “tercerización” de su dinámica socioeconómica. La PEA disminuyó entre un 3.4% y un 5.7% en el conjunto del territorio. En cinco de los ocho municipios disminuyó la cantidad de personas con 15 años o más que reportaron tener una ocupación remunerada o que buscaban empleo.

Por otra parte, la agricultura pasó de un 46% a un 21% de la PEA entre 1992 y 2007.⁷ Aún cuando este último dato invisibiliza la población que utiliza la agricultura como una actividad auxiliar o secundaria, el hecho es que también se registra un incremento de actividades comerciales y de servicios.

Producto de estos cambios, el territorio carece en la actualidad de una actividad económica distintiva y articuladora de la dinámica territorial en su conjunto. Al año 2007 los tres sectores de mayor peso en la PEA (agricultura, comer-

cio, administración y servicios públicos) sólo alcanzan a sumar 50% de la misma, mientras que la otra mitad se desgrana en más de una docena de actividades. Las remesas también juegan un rol clave en la dinámica del territorio. El Censo de 2007 reporta que el 16% de la población con 10 años o más recibe remesas. Las cuales son significativas para el mejoramiento de la situación de pobreza.⁸

La dinámica de la pobreza y desigualdad en el territorio presenta importantes diferencias entre los municipios: si bien los ocho municipios muestran un mejoramiento en el ingreso y la pobreza, solamente dos habrían mejorado las condiciones de distribución. El resto de esta sección está dedicado a profundizar en estas dinámicas y en el impacto que ha tenido en los medios y nivel de vida de la población. El análisis se enfoca a nivel de todo el territorio. Las diferencias entre municipios serán tratadas en la sección final del documento.

Cambios sociales asociados a la tercerización de la PEA⁹

En el año 2007 las mujeres representaban el 34% de la PEA, mientras que en 1992 sumaba un 19%. Actualmente, el 96.4 % de ellas se insertan en actividades no agropecuarias, mientras que esa cifra es de 64.9% para los hombres. De modo que uno de los factores que influyen para restar peso al sector agropecuario es la incorpo-

⁶ Esta sección hace uso intensivo de la información contenida en las bases de datos de los Censos de Población y Vivienda 1992 y 2007, así como del Censo Agropecuario 2007/2008, a nivel de microdatos. Solamente donde se ha considerado necesario para evitar confusiones se indica la fuente utilizada.

⁷ Excepto donde indica otra cosa, la definición de la PEA utilizada en este informe corresponde a los ocupados y cesantes de 10 años o más, excluyendo quienes buscaron trabajo por primera vez.

⁸ Según el Mapa de Pobreza 2004, al sustraer remesas de los ingresos de los hogares, la pobreza rural en el territorio pasaría de 47% a 54% de la población y la pobreza urbana de 22% a 32%.

⁹ PEA formada por ocupados y cesantes, de 10 años o más, excluyendo quienes buscaron trabajo por primera vez.

ración (o visibilización) de las mujeres dentro de la PEA.

La tercerización también está relacionada con el acceso de la población al sistema educativo: el porcentaje de analfabetismo de la PEA no agropecuaria es de 11%, pero alcanza el 29.2 % de la PEA agropecuaria. Es importante tomar en cuenta que los índices educativos de la PEA mejoraron de 1992 a 2007: el porcentaje de analfabetos bajó del 27% al 15% mientras que el porcentaje que terminó la educación media o alcanzó un título técnico o superior se elevó de 11% a 28%.

Desde luego, esta mejora en los índices de educación está protagonizada por la población más joven y esto impacta la composición etaria de los sectores agropecuarios y no agropecuarios. Mientras el 58% de las personas con 50 años o más están ocupadas en el sector agropecuario, un 80% de los menores de 29 años trabajaban en el sector no agropecuario.

Visto de otro modo, la edad promedio de la PEA agropecuaria es de 43.3 años, mientras que para el sector no agropecuario es de 36.7 años. La edad de los agricultores se ha mencionado como un factor desfavorable para la productividad de las unidades de producción familiares (Quiel, 2009).

Cambios en la estructura ocupacional de la PEA en el Cerrón Grande (1992-2007)

Un análisis del comportamiento de la PEA por ramas de actividad económica entre los años 1992 y 2007 señala que 13 de 17 ramas de actividad crecieron en cantidad de ocupados, pero pocas de ellas tienen por sí mismas un impacto importante en la estructura de la PEA.¹⁰ El

¹⁰ Dicha clasificación se hizo distribuyendo en 17 clases las 292 ramas económicas utilizadas en los Censos

Cuadro No.1, indica las actividades que crecieron o bajaron y su impacto en la PEA.

De las 17 actividades, solamente dos de ellas — el comercio y la construcción— han crecido de un modo que sí han tenido un impacto notable en la estructura ocupacional del territorio. La construcción y ramas económicas conexas — comercio de materiales de construcción, por ejemplo— pasó de representar menos del 3% a casi el 9% de la PEA. El comercio en general, por otra parte, pasó del 6.2% al 16.3%.

El cambio más importante se observa en la agricultura, que redujo en más de la mitad su participación porcentual en la PEA. Por otra parte, el número de personas que dijeron tener como actividad principal la ganadería se incrementó en varios cientos; pero su aporte a la PEA sólo alcanza el 3.1%, mientras que el número de personas que dejaron la agricultura supera las 5 mil.

En síntesis, podemos apreciar que hacia 1992, la economía de territorio tenía por ejes la agricultura y el servicio militar,¹¹ pero en el año 2007 hay más diversificación, sin que pueda encontrarse un grupo de actividades encadenadas que constituya el nuevo “eje” económico.

No obstante los cambios descritos, se puede verificar que el empleo continúa fuertemente vinculado a la valorización de los recursos naturales de la zona. En el Cuadro 2, se ha destacado el peso que tienen ocho actividades relacionadas directamente con la base de recursos naturales del territorio: todo el sector primario, la industria que se ocupa de la transformación

de 1992 y 2007 (clasificación CIIU, Rev. 3, a nivel de 4 dígitos).

¹¹ Posiblemente exista un aumento en la seguridad privada, pero el número de empleados en el Ejército debe haber disminuido de manera importante con respecto a 1992. Este rubro en torno a la seguridad representaba entonces, en 1992, el 13% de la PEA y ahora sólo el 4%.

Cuadro 1**Cambios en la importancia relativa de las actividades económicas en la ribera Norte del Cerrón Grande, según cantidad de ocupados. 1992-2007**

		Impacto en la estructura del empleo	
		Alto	Limitado
Cantidad de ocupados	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> -Construcción, servicios y ventas conexos -Comercio al por mayor y por menor (bienes no especificados en otra parte) 	<ul style="list-style-type: none"> -Cría de ganado -Cría de otros animales Y explotación mixta -Servicios y ventas relacionados con el sector agropecuario -Pesca -Industria de alimentos y bebidas -Industria (otras manufacturas) -Servicios y ventas relacionados con circulación -Restaurantes y turismo (hoteles, viajes, lugares turísticos) -Servicio doméstico -Servicios y administración pública, Org. sociales, suministro básico -Otras actividades, servicios y alquileres (no indicados en otra parte)
	Decreciente	<ul style="list-style-type: none"> -Agricultura -Ejército, policía y seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> -Explotación de minas y canteras -Forestería e industria forestal básica

Fuente: Censo de Población, 2007.

básica de bienes primarios y la categoría de restaurantes-turismo (por su vinculación a los atractivos naturales). En conjunto representan más de un 40% de la PEA en cada uno de los municipios contemplados, con la excepción de Chalatenango (donde alcanza el 27%).

La mayoría de estas actividades son realizadas principalmente por hombres (Cuadro 2). Así, la proporción de la PEA masculina vinculada de forma más cercana al capital natural suma 46% en todo el territorio. Las mujeres tienen poca participación en las actividades primarias. Para ellas, los empleos más frecuentes se encuentran, en ese orden: a) comercio, b) servicios sociales y administración pública y c) servicio doméstico. Para los hombres las actividades más importantes son: a) la agricultura, b) la construcción y

ventas relacionadas con la construcción y c) el comercio en general.

Los análisis basados en la distribución de la PEA sólo dan cuenta de la “actividad principal” de las personas, según el Censo de Población.¹² Pero de ese modo se subestima la importancia de la agricultura y otras actividades primarias como actividad económica complementaria y como práctica cultural sumamente difundida.

De acuerdo con el Censo de Población (2007) la PEA agropecuaria (de 10 años o más) en el territorio sumaba 4,459 personas, cifra menor pero cercana a la cantidad de “productores” identificados en el Censo Agropecuario

¹² Recuérdese que el dato del Censo remite a la pregunta “¿a qué actividad se dedica o qué produce usted?”.

Cuadro No. 2
Ribera Norte del Cerrón Grande.
Estructura porcentual de la PEA según actividades económicas, por sexo. 2007

	PEA masculina	PEA femenina	Total PEA
Agricultura	29.9%	3.1%	20.9
Cría de ganado	4.5%	.3%	3.1
Cría de otros animales y explotación mixta	0.6%	.2%	0.5
Servicios y ventas relacionados con el sector agropecuario	3.5%	.2%	2.4
Forestería e industria forestal básica	.3%	0.0%	.2
Pesca e industria del pescado	4.7%	.4%	3.3
Industria de alimentos y bebidas (otros)	1.5%	6.3%	3.1
Restaurantes y Turismo	.7%	7.6%	3.0
<i>Subtotal actividades vinculadas directamente al capital natural</i>	45.8 %	18.3	36.5
Industria (otras manufacturas)	3.8%	5.1%	4.3
Construcción, servicios y ventas conexos	13.2%	.2%	8.8
Servicios y ventas relacionados con circulación y almacenamiento	8.9%	.6%	6.1
Comercio al por mayor y por menor (bienes no especificados en otra parte)	9.8%	29.1%	16.3
Servicio doméstico	.5%	17.5%	6.3
Ejército, Policía y seguridad privada	5.2%	1.6%	4.0
Educación, salud, administración pública, gobierno municipal, Org. sociales, suministro de energía y agua	8.3%	20.8%	12.5
Otras actividades, servicios y alquileres	4.4%	6.8%	5.2
Total	100.0%	100.0%	100.0%

(2007/2008), aproximadamente unos 5,300.¹³ Adviértase, sin embargo, que estos dos universos son distintos, aunque traslapados.

El Censo de 2007 reporta un total de 621 personas que dicen dedicarse a la pesca en el Humedal Cerrón Grande. Pero CENDEPESCA, la institución que regula esta actividad, reporta alrededor de 2,700 pescadores (Chavarría,

¹³ El Censo Agropecuario define productor agropecuario como "toda persona natural o jurídica que toma las decisiones en el manejo o administración de las actividades que se desarrollan en la explotación agropecuaria" (MEIC/MAG, 2009: 11). En el trabajo de campo, la condición de productor se verificaba preguntando a la persona si era dueña de lo que produce, cualquiera fuera el tipo de tenencia sobre la tierra trabajada: propia, en alquiler, etc. (MEIC: 2007). Es importante tomar en cuenta que la definición de productor agropecuario no abarca a los trabajadores agrícolas empleados para otros a cambio de una remuneración.

2010). Muchos de éstos posiblemente no practiquen la pesca como medio principal de vida. De hecho, los pescadores carnetizados por CENDEPESCA suman menos de 900. Si tramitar un carné es un indicador de la prioridad que las personas le otorgan a la actividad, el dato del Censo no está demasiado alejado de la realidad. En todo caso, se comprueba que el análisis basado en la PEA no permite captar las múltiples actividades que los productores/as realizan y generalmente conduce a la subestimación de la importancia de las actividades complementarias de la economía familiar.

Dinámicas del Capital Natural

El capital natural se ve afectado por dinámicas de degradación de los ecosistemas Humedal Cerrón Grande y cuencas Tilapa y Soyate, por

la disminución de la cobertura vegetal, pérdida de la capacidad productiva del suelo y crecimiento descontrolado de asentamientos peri urbanos. Los pobladores perciben esta degradación y señalan su fuerte preocupación por la crisis del recurso hídrico pero no identifican prácticas específicas para su conservación (Díaz, Escobar, Gómez y Morán, 2010).

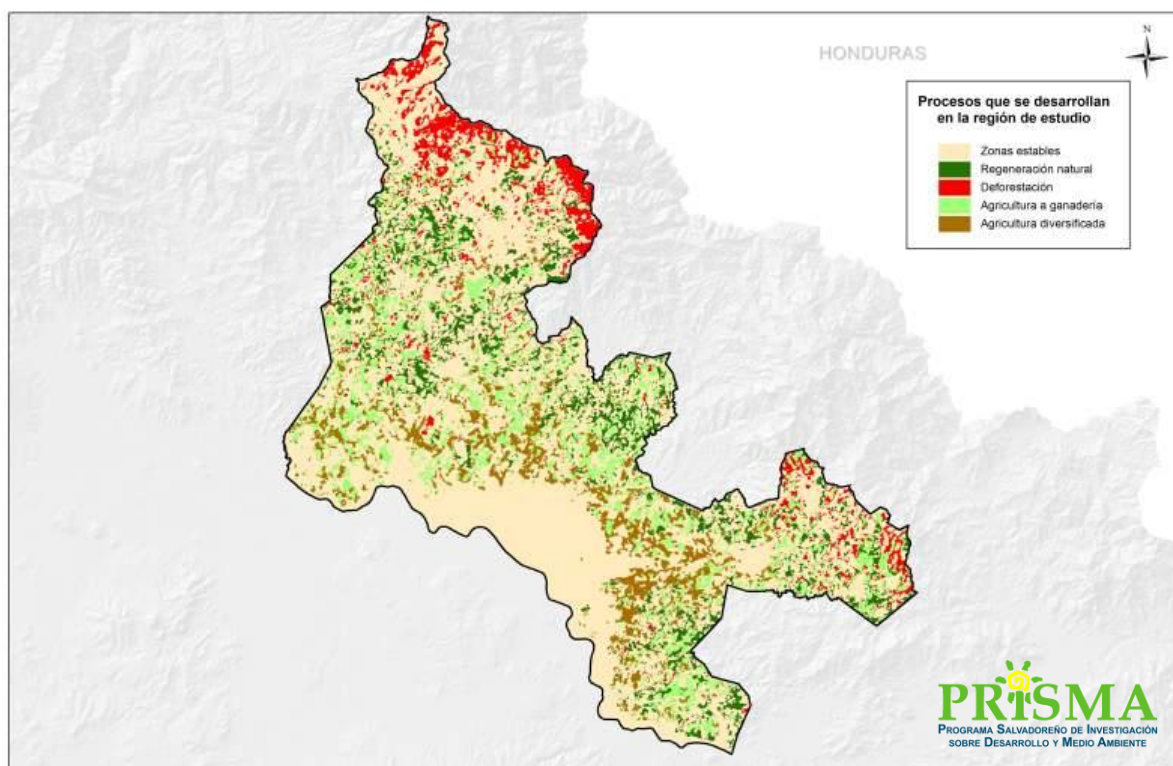
El deterioro del capital natural limita las actividades agropecuarias y de pesca y restringe el desarrollo del turismo. La contaminación del agua del humedal y de la mayoría de ríos que desembocan en él, limita su aprovechamiento para riego. Las actividades turísticas se limitan a paseos en lancha pues no resulta atractivo realizar actividades de mayor contacto con el agua. Otros problemas identificados son la pérdida de la capacidad productiva del suelo,

crecimiento descontrolado de asentamientos peri urbanos y conflictos por la extracción de material pétreo en los ríos, afectando su curso y erosionando los terrenos privados.

La ganadería está determinando el paisaje en el territorio, a pesar de ser una actividad en la que se ocupa una minoría de la población (ver Mapa 2). El cambio de la agricultura a ganadería se refleja en el cambio del uso del suelo. Entre 1991 y 2005, el 7.81% del mismo pasó de estar cubierto por cultivos mixtos y anuales a pastos y potreros. En el conjunto del territorio, la superficie dedicada a pastos para ganado representa la mitad (52.6%) de la extensión total de las explotaciones agropecuarias. Los talleres realizados con pobladores confirman la importancia de la actividad ganadera, las comunidades le dan mayor valor al forraje, como la mate-

Mapa 2

Transiciones significativas y zonas estables en la ribera Norte del humedal Cerrón Grande y en las sub cuencas de los ríos Tilapa y Soyate



Fuente: Elaboración propia en base a Pontius Jr. (2004) en Díaz, Escobar, Gómez y Morán, 2010.

ria prima más valorada por su estrecha relación con la ganadería.

Sin embargo, el número de productores dedicados a la ganadería es pequeño con respecto al conjunto de productores agropecuarios. Los ganaderos especializados (10.6% en los ocho municipios) manejan el 64% de la extensión total de las explotaciones agropecuarias en el territorio. Se observa que la proporción de pastos dentro de cada municipio es mayor en la medida que sea mayor la superficie controlada por los ganaderos especializados.

Los conflictos por el uso no regulado del capital natural afectan sobre todo a la zona de las tierras fluctuantes del Humedal, que son propiedad de la CEL. Aunque sólo pueden ser trabajadas entre marzo y abril, tienen una alta demanda por la fertilidad del suelo. Muchas de estas tierras son manejadas por grupos asociativos, como el caso de Santa Bárbara y Copapayo, donde los ganaderos tienen mayor influencia y poder que otros usuarios. Esto ha llevado a que en su mayoría (75%) las tierras fluctuantes estén dedicadas a la ganadería y únicamente el 25% sean utilizadas para agricultura.

Existen procesos que tratan de revertir la degradación, como la diversificación agrícola o agroforestería desarrollada por medianos productores, que combinan el cultivo de maíz con los pastos y mantienen cierto arbolado de frutales o especies para leña y producción de miel; que además, incorporan activamente a las mujeres de las partes altas de la cuenca. También hay propuestas para activar el turismo comunitario y una creciente acción colectiva para la protección de las cuencas y el humedal. Un análisis basado en imágenes satelitales confirma estas tendencias al mostrar que monocultivos de pastos y cultivos anuales se han convertido en zonas de cultivos mixtos, sumando un 8.15% de la zona mapeada (4,199.1 has) (Díaz, Escobar, Gómez y Morán, 2010).

Estrategias de medios de vida: pesca, agricultura y ganadería

Las actividades productivas, claves para las estrategias de medios de vida, están condicionadas sensiblemente por las dinámicas territoriales. Abordamos aquí las relacionadas con la pesca, la actividad agropecuaria y la ganadería.

La pesca

La pesca en el Cerrón Grande no era una práctica tan difundida en 1992 como lo es ahora. Según el censo de aquel año, unas 300 personas en todo el departamento de Chalatenango reportaron ganarse la vida mediante esa actividad. Esta cifra aumentó a 600 en el censo del año 2007; no obstante ese incremento, su peso dentro de la PEA sólo subió de 1.5% a 3.3%. Ahora bien, estas cifras no captan la importancia que puede tener la pesca como actividad complementaria para los ingresos o la dieta de las familias en el territorio.

Se trata de una población joven, con una edad promedio de 32.2 años, frente a los 38.3 de la PEA en su conjunto. Por otra parte, el sector presenta niveles educativos bastante bajos, pues el analfabetismo llega al 28%. Esta cifra es casi idéntica a la que presenta el sector agropecuario, y confirma que ambas actividades extractivas son opciones para la fuerza laboral menos capacitada.

El Censo de Población señala que la gran mayoría de pescadores son hombres (un 95.5%). Esto ha sido confirmado en la investigación de campo. En el Taller de Medios de Vida con pescadores, de 13 mujeres que estuvieron presentes, solamente una dijo tener como actividad diaria la pesca.

Las mujeres se involucran en las actividades pesqueras más comunes, tales como captura y venta de pescado, en la reparación de aperos y

equipos. Hay tecnologías de pesca con asociación de género: los métodos de pesca percibidos como de mayor peligro, tales como el arponeo, son llevados a cabo en su mayoría por hombres. Las mujeres se dedican a la venta del producto y las que están asociadas a cooperativas pesqueras también realizan tareas administrativas. Algunas, de un modo incipiente, han incurrido en el servicio de paseos en lancha. Sin embargo, el turismo en el humedal no se ha desarrollado. Tampoco se han producido encadenamientos para agregar valor al pescado: este se vende fresco, a lo sumo descamado o en lonja (Florían, 2010).

Las mujeres manifestaron participar activamente como miembros de cooperativas, aunque la mayoría de estas sólo cuenta con una o dos asociadas, es decir del 5 al 10% de socios aproximadamente. Al indagar porqué esta baja participación, las mujeres responden que existe la noción de que la mujer descuida las obligaciones domésticas por asistir a las actividades que demanda la cooperativa. Sólo existe una cooperativa donde el 60% de la membrecía es femenina. Las socias lo atribuyen a que han sido las mismas mujeres quienes han promovido la creación de la cooperativa, la cual tiene como objetivo establecer una planta de procesamiento y promover actividades turísticas.

La producción agropecuaria

El 85% de los productores agropecuarios registrados por el Censo Agropecuario 2007 en el territorio dijo dedicar la mayor parte de su producción al consumo del grupo familiar, y por ello se les ha clasificado como “pequeños” o de “subsistencia”. El otro 15% corresponde a productores “comerciales” pues reportaron que la mayor parte de sus productos los destinan a la venta.¹⁴ La distribución entre productores pe-

¹⁴ De los 20 mil 770 productores estimados en todo el Departamento, solamente 17 poseen la condición de persona jurídica y el resto son personas naturales. En

queños y comerciales resulta similar en todos los municipios de Chalatenango: por norma, existen entre 8 y 9 productores pequeños por cada productor comercial.

El Censo Agropecuario también da cuenta de la extensión de la práctica de la “producción de patio”.¹⁵ Se estima que unas 13 mil viviendas en el territorio, incluyendo zonas urbanas, cuentan con huertos, cultivos o especies animales menores. Representan un 83% de las viviendas registradas en el Censo. Ello prueba que las prácticas agrícolas están mucho más difundidas y arraigadas de lo que un dato como la PEA, centrada en la actividad “principal”, puede recoger.¹⁶

Tomando en cuenta que el trabajo en el hogar lo realizan principalmente mujeres, es de suponer que la producción de patio está en buena medida a su cargo. Esto ofrece una perspectiva muy distinta a la que reporta el análisis de la PEA, pues de las 4,459 personas que reportaron estar ocupadas en el sector agropecuario, únicamente 223 eran mujeres (5.5%).

Ganadería

El número de personas que dijeron dedicarse a la ganadería no llega a sumar las 600 personas en el Censo de Población de 2007. En cambio, el

el área de los 8 municipios de la ribera norte del Cerrón Grande apenas se encuentran 3 empresas agrícolas, todas ellas en El Paraíso.

¹⁵ Ésta se define como la producción “incidental”, circunscrita “estrictamente al área de la vivienda o solar” y “destinada al autoconsumo del hogar y/o venta incidental”. Puede comprender “hortalizas, recolección de frutas, la cría de aves de corral y especies menores en pequeñas cantidades para lo cual no es necesaria la utilización de instalaciones físicas”. (MEIC/MAG, 2009: 11).

¹⁶ Incluso a nivel nacional se estima que la producción de patio se encuentra en 904 mil 293 viviendas, un 65,9% del total de las viviendas entrevistadas en el Censo de 2007. Para el Departamento de Chalatenango en su conjunto, existen 36 mil 848 viviendas con producción de patio, un 84% del total.

Cuadro No.3
Ribera Norte del Cerrón Grande. Productores agropecuarios que califican como ganaderos

	Cantidad			En porcentaje		
	Tipo de productor			Tipo de productor		
	Comercial	Pequeños	Todos	Comerciales	Pequeños	Todos
No ganaderos	240	4191	4431	37.0%	90.6%	84.0%
Ganaderos	409	436	845	63.0%	9.4%	16.0%
Ganaderos especializados	329	231	560	50.7%	5.0%	10.6%
Total	649	4627	5276	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Agropecuario 2007/2008

Notas: Con base en definición de “ganadero” como el productor agropecuario que cuenta con al menos 5 cabezas de ganado. “Ganaderos especializados”: los que, adicionalmente, dedican más superficie a los pastos que a los cultivos.

Censo Agropecuario reporta un total de 1,031 productores que poseen animales vacunos, equivalente al 20% del total de productores en el conjunto de los 8 municipios.

Desde luego, no por contar con ganado se convierte el productor en “ganadero” con las implicaciones sociales y culturales que esa condición tiene, pues al menos en el caso de los pequeños productores es una actividad complementaria y subordinada a la agricultura. Sin embargo, muchos de los criadores de ganado que se habían autodefinido como pequeños productores, tienen una cantidad de animales que va más allá del autoconsumo: más de la tercera parte de los “pequeños” productores que tienen ganado cuentan con 10 o más vacunos. De hecho, son una minoría los que tienen menos de 5 animales: el 29% de los pequeños productores con ganado posee de 2 a 4 animales. Entre los productores comerciales que tienen ganado, el 92% posee no menos de 10 animales. Ello quiere decir que la incorporación de ganado se hace con una lógica comercial y pocas veces con el solo propósito de seguridad alimentaria.

La identidad de ganadero también supone una opción entre la agricultura y la ganadería, que para la mayoría es excluyente en vista de las limitaciones de tierra. De modo que otro indicador de la condición de ganadero es la superficie que el productor dedica a los pastos.

Podemos aproximarnos a la cantidad de ganaderos combinando dos criterios. Tomando en cuenta que una familia de agricultores puede contar con unas cuatro cabezas de ganado, se puede señalar como “ganadero” al productor que cuenta con al menos 5 cabezas. Si además la superficie dedicada a pastos es mayor que la dedicada a cultivos podemos hablar de “ganaderos especializados”. El resultado de esta clasificación se muestra en el Cuadro 3, abajo: la cantidad de ganaderos así definidos ronda los 850 en el Norte del Cerrón Grande, lo cual representa el 16% de los productores. Los ganaderos especializados suman el 11% del total de productores, pero equivalen a la mitad (51%) de todos los productores comerciales. Casi dos terceras partes de los productores comerciales (63%) pueden considerarse ganaderos en tanto cuentan con al menos 5 cabezas de ganado.

Lo anterior indica que la agricultura es una opción en la que persisten los pequeños productores, es decir, los que destinan la mayor parte de la producción al consumo familiar; pero los productores operando con una lógica comercial prefieren dedicarse a la ganadería. La relación entre agricultura y ganadería resulta ser de dos tipos: se cultiva para alimentar al ganado (sorgo y maíz) o se cultivan alimentos y como actividad secundaria, se cría ganado.

Los talleres de medios de vida confirmaron que la mayor parte de las tareas en la producción ganadera las realizan hombres (cultivos, elabo-

ración del ensilo, control de malezas, reparación de cercos y otras actividades de rutina). Las mujeres participan en el procesamiento de lácteos y en la venta de ganado. Esto concuerda con los datos del Censo de Población donde del 3.1% de personas dedicadas a la ganadería, 97% son hombres y 3% son mujeres.

Las mujeres participantes en el taller sobre ganadería (n=3) eran todas solteras y reportaron que la ganadería es su actividad principal seguida por la agricultura. Dos de estas mujeres son dueñas de 20 a 30 cabezas de ganado y contratan jornaleros hombres para la ejecución de las actividades de rutina. Una de ellas, en cambio, se ocupa personalmente de todas las actividades de la ganadería y posee 3 animales.

Esto sugiere que para participar en la ganadería, las mujeres han de ser dueñas de sus animales o, posiblemente, “ayudar” en la actividad de una manera informal. Pero es probable que este último perfil de mujeres no se reconozca como ganadera. Al taller, por ejemplo, no se presentó ninguna mujer que afirmara dedicarse a los oficios del hogar y tener como actividad secundaria ganadería. Estas mujeres expresaron interés en recibir capacitación sobre procesamiento de productos lácteos como diferentes formas de hacer quesos. El que las mujeres se vean involucradas con el procesamiento de lácteos y no los hombres puede deberse a que esto es visto como una extensión de la labor del hogar, aunque remunerada: algo que les permite aumentar sus ingresos sin apartarse de las labores del hogar.

Los hombres participantes en el taller (27) manifestaron dos arreglos distintos en las actividades productivas. La ganadería es su actividad principal y la agricultura su actividad secundaria o viceversa. Algunos hombres llevan toda la vida en el negocio de la ganadería, bien sea como propietarios de animales o como jornaleros, mientras que otros se incorporan en la

actividad sin conocimiento previo. Incluso se identificó el caso de un hombre que al jubilarse decidió incursionar en la cría de ganado. Lo anterior sugiere que una parte de la población tomada por económicamente inactiva tiene participación en las actividades productivas.

A continuación explicamos cómo incide en estas estrategias de medios de vida el acceso a los activos tierra, créditos y conocimiento, para los hombres y mujeres del territorio.

Acceso a la tierra

El 90% de productores en el territorio maneja explotaciones agropecuarias¹⁷ menores a 5 manzanas, y un 41% trabaja menos de una manzana (Mz).¹⁸ Por otra parte, es importante tomar en cuenta el tipo de tenencia sobre la explotación.¹⁹ Así, el porcentaje de productores que reportó trabajar exclusivamente con tierra en alquiler o préstamo fue de 58%. Si se toma en cuenta únicamente pequeños productores, la cifra aumenta a 63%.

Si bien los productores que trabajan exclusivamente tierra en alquiler son una mayoría, la extensión de tierra que manejan es una fracción minoritaria de toda la tierra: un cuarto (24.6%) de toda la extensión ocupada por explotaciones agropecuarias en el territorio (17,826 Mz) fue trabajada en régimen de alquiler, mientras que la tierra trabajada por sus propietarios sumó el 71% de la extensión. De las casi 18 mil manzanas mencionadas, solamente el 5.9% (1,052 Mz)

¹⁷ La explotación agropecuaria es la unidad de producción manejada por el/la productor, independientemente del tipo de tenencia (propiedad, alquiler, otros). No toda la tierra en las explotaciones agropecuarias tienen uso agropecuario.

¹⁸ Una mayoría equivalente a dos terceras partes (65.4%) se encuentra en el rango entre 0.5 y 2 Mz. Las explotaciones más pequeñas miden 0.06 Mz, mientras la más grande supera las 200 manzanas.

¹⁹ La tenencia se refiere a los acuerdos o derechos bajo los cuales el productor trabaja la tierra.

son manejadas por mujeres. Para el caso de las tierras manejadas en propiedad, el porcentaje es muy similar, de 5.5% (690.1 Mz de un total de 12,651 Mz).

¿Qué tan concentrada se encuentra la propiedad de la tierra? El Censo no permite saber si la tierra alquilada se arrienda a otros productores o a personas ajenas a la actividad. Y dado que el Censo Agropecuario ofrece información únicamente sobre productores²⁰ el análisis de la concentración de la propiedad ha de restringirse a los productores-propietarios. Dentro de este grupo, el 10% más rico controla el 69% de la tierra trabajada en propiedad y el 30% es propietario de sólo el 2.5 % de dichas tierras.

Este análisis se limita al 42% del total de productores en el territorio (los que trabajan tierra de su propiedad) y no toma en cuenta la tierra que es trabajada en alquiler o préstamo, que suma 29% de toda la tierra manejada en los 8 municipios. Conviene contemplar la concentración de toda la tierra en explotaciones agropecuarias, independientemente de las formas de tenencia. La concentración de la tenencia es parecida a la de la propiedad: el 10% más rico de los productores controla alrededor del 70 % de la tierra en los dos análisis, mientras que el 30% más pobre controla menos del 4%.

La concentración y tenencia inciden en las dinámicas del territorio, el acceso a parcelas pequeñas condiciona el tipo de cultivos hacia la autosubsistencia o abandono a otro tipo de acti-

²⁰ El Censo Agropecuario se aplicó únicamente a productores identificados mediante la pregunta "¿Realiza actividades agropecuarias por cuenta propia y es dueño de lo que produce?". Nótese que al responder negativamente a esta pregunta, una de las primeras en la boleta del Censo (MEIC, 2007), el/la informante queda excluido/a del censo. Por lo tanto, no se recogió información acerca de un número no determinado de propietarios de tierra que no participan de la actividad agropecuaria, como pueden ser los que mantienen exclusivamente tierras "en desuso", o rentistas que no trabajan su tierra y solamente la arriendan o alquilan.

vidad, sobre todo si se cuenta con remesas o mayor cercanía a fuentes de empleo urbanas. Los que cultivan la tierra en préstamo o arriendo tienen condicionada la continuidad de su actividad por los intereses de los propietarios y tampoco les permite avanzar a la diversificación u obras de conservación. Esto dependería de arreglos internos entre propietarios y arrendatarios en función de asegurar recursos clave como el agua, control de incendios, etc. Es aquí donde juega un rol clave la institucionalidad del territorio.

Acceso a créditos y conocimiento

A pesar de que los sectores de la pesca y la ganadería sean importantes en el territorio, no gozan de reconocimiento crediticio en las entidades bancarias. Un pescador puede acceder a un préstamo vía cooperativa o familia, pero no existe un crédito para pescadores. Un ganadero suele acceder a créditos vía agricultura puesto que existen entidades como el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y créditos formales de este sector. Este tipo de condiciones modela el territorio en pro de generar un aumento al acceso al capital económico, generalmente incentivando la actividad agrícola para acceder a créditos.

Esto también determina el tipo de asesoría técnica. En el territorio es más común recibir información e insumos para llevar a cabo siembra de maíz, pasto, frutales u otro cultivo que distribuir anzuelos y redes, por ejemplo. En este caso, la organización cooperativa funciona como fuente de propagación de conocimiento y facilita el acceso de diversos activos, sobre todo para el caso de los 300 pescadores que están organizados en 12 cooperativas y 7 asociaciones comunales pesqueras.

Los incentivos económicos, también tecnológicos y cognitivos se dirigen hacia un tipo de actividad determinada y esto repercute en las

dinámicas del territorio. El acceso a créditos, capacitaciones y otros incentivos sigue teniendo a los hombres como destinatario mayoritario. En los talleres realizados los hombres mostraron tener mayor información que las mujeres en cuanto a créditos y asistencia técnica (Florian, 2010).

Comercialización de la producción agropecuaria y pesquera

La producción agropecuaria del territorio está insuficientemente diversificada. Los cultivos comerciales más importantes son hortalizas, frutas y arroz, se trata de explotaciones que representan una parte minoritaria de la producción agrícola. En la zona predomina la comercialización vía intermediarios para el mercado de San Salvador.

El principal producto agrícola del territorio sigue siendo el maíz, cultivado con propósito de autoconsumo. Una minoría de productores comercializa los excedentes para la producción de platos locales (tortillas y pupusas) o a través de intermediarios de fuera del territorio que los trasladan a los mercados mayoristas de San Salvador.

El sector ganadero presenta incipientes niveles de especialización. Casi todo el hato es de doble propósito, aunque el objetivo principal es la producción de leche. Chalatenango carece de una industria procesadora de leche, excepto a nivel artesanal y la mayor parte producida en el territorio no se procesa ni se consume localmente. La mayor parte de los productores vende la leche fluida a distintos intermediarios provenientes del mismo departamento quienes la distribuyen entre procesadores artesanales y semi-tecnificados. Estos intermediarios recolectan la leche de diferentes productores sin sistema de refrigeración llevando la producción a procesadores en San Salvador (BMI/Fortagro, 2006: 55).

Solo una minoría de productores vende directamente a las grandes plantas procesadoras de leche, las cuales tienen por política tratar directamente con ellos (BMI/Fortagro, 2006); estos que han podido vincularse a los procesadores industriales se encuentran en San Rafael. El esfuerzo asociativo propio les ha permitido adquirir la tecnología necesaria para suministrar leche fría a una de las principales plantas procesadoras del país en San Salvador.

La producción pesquera está en su totalidad en manos de pescadores artesanales; algunos están organizados en cooperativas. Estas organizaciones no han podido influir en los esquemas de comercialización que se realizan a través de intermediarios. Se estima que del total de producción del HCG, un 5% se comercializa a nivel local, un 15% en mercados de mayoreo de San Salvador y un 80% en Guatemala (Chavarría, 2010: entrevista).

Las cadenas de comercialización de frutas y hortalizas se realizan a través de intermediarios que los trasladan a los mercados de San Salvador. Algunos productores de sandía y papaya han logrado convertirse en proveedores regulares de las cadenas de supermercados. Pero el impacto económico de estas explotaciones, en términos de producción, ingresos y empleo, resulta marginal, pues la superficie cultivada ronda entre las 10 y 20 hectáreas por plantación, mientras que el número de productores con este tipo de vínculos no pasa de una decena.

El caso de la producción de arroz sí se realiza con un propósito comercial, aunque no es uno de los productos importantes del territorio, excepto para algunas pocas comunidades. Estos productores han entrado en convenio con los industrializadores a través de BOLPROES.²¹

²¹ La Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROES), nació en 1995, comercializa productos de toda índole en la forma de subasta a viva voz.



Los cambios institucionales que inciden en la dinámica del territorio están relacionados con las agendas desarrolladas desde la posguerra. Las políticas oficiales conformaron una agenda diseñada “externamente” respecto del territorio, orientada a la reconstrucción y reinserción productiva, fortalecimiento de municipalidades y dotación de infraestructura. Por otra parte, los planes de desarrollo nacional enfatizaron la función de conectividad de la zona norte, vinculada a una estrategia que proyectaba al país como proveedor de servicios logísticos regionales.

Los actores locales van desarrollando una agenda de desarrollo “endógena” –que si bien se vincula con la agenda “externa”, a partir de los programas y proyectos de reconstrucción y desarrollo– prioriza y construye sus propias estrategias para el fortalecimiento de la base de producción familiar, la cultura organizativa comunitaria y la protección ambiental. Esta agenda es implementada por organizaciones locales y coaliciones multiactores, con fondos de proyectos de cooperación y solidaridad internacional.

En este apartado abordamos ambas “agendas” con la intención de entender la complejidad de la institucionalidad en nuestra zona de estudio y como ésta incide en la dinámica territorial rural.

La agenda oficial y “externa”

La zona Norte de El Salvador ha estado históricamente marginada de las políticas y programas de desarrollo del Estado, ha jugado un papel de complemento económico subordinado a la región metropolitana. A pesar de su limitada importancia agrícola y económica, la zona ha sido proveedora de servicios ecosistémicos; sus recursos naturales permiten generar energía hidroeléctrica y agua para el resto del país, sin

que esto incida en el mejoramiento de medios de vida de su población.

El fin del conflicto armado presenta un nuevo escenario de políticas, principalmente, orientadas a la reconstrucción y reinserción productiva, fortalecimiento de municipalidades y formación de mancomunidades; así como planes de desarrollo nacional con enfoque en el rol económico del territorio. Los cambios institucionales que inciden en la dinámica del territorio están relacionados con estas políticas, cuyos objetivos han sido los siguientes: a) Reactivación y reconstrucción de posguerra, mediante la aplicación de enfoques de desarrollo rural basados en la agricultura y la participación ciudadana; b) Protección de los recursos naturales del territorio; c) Fortalecimiento municipal y de las mancomunidades, d) Dotación de “infraestructura social” (camino, electrificación, sistemas de agua potable, etc.) y e) Estimular la conectividad de la zona con la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte.

Los programas de reconstrucción y reinserción productiva

Posterior a los Acuerdos de Paz (1992) se iniciaron planes de reconstrucción social y productivo, distribución de tierras a excombatientes, programas y proyectos para el fortalecimiento de gobiernos municipales, reactivación económica y desarrollo rural, apoyados con fondos de cooperación internacional y redes de solidaridad. Estas intervenciones atendieron necesidades básicas (vivienda, electrificación, sistemas de agua potable, etc.) pero no lograron una articulación más estratégica que compensara el colapso de los medios de vida rurales tradicionales. En cambio, sí contribuyeron a la generación de prácticas de diálogo y participación democrática para el abordaje de los problemas

locales como salud, educación, medio ambiente y opciones productivas.

Es clave entender el rol que desempeñan en la reconstrucción el Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados en Centro América, PRODERE (1990-1995) y el Programa de Desarrollo Rural en Chalatenango, PROCHALATE (1994-2000).

PRODERE, impulsado por las Naciones Unidas, realizó proyectos puntuales, e impulsó mecanismos de concertación alrededor de problemáticas relacionadas con el desarrollo local en temas de salud, educación y desarrollo económico. Ninguno de los mecanismos participativos creados por PRODERE en Chalatenango sobrevive actualmente, pero aportó a legitimar una cultura de participación muy débil en aquel momento y estableció un conjunto de organismos que cambiaron la institucionalidad económica del territorio, como cooperativas de crédito y asociaciones comunales de pescadores.²²

PROCHALATE surge como una solicitud de las comunidades repatriadas y de los ex combatientes del FMLN, funcionó como una combinación de esfuerzos nacionales y de cooperación internacional para la reinserción productiva y promoción de la participación de actores locales—a partir de proyectos de crédito, producción agrícola, conservación de recursos, salud, educación e infraestructura comunitaria y atención legal para dotar de documentación a la población repatriada. (FUNDE, 1995)

Las acciones de PROCHALATE se enfocaron en: a) fortalecer y transformar la base producti-

va, principalmente de la agricultura y b) la recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales.

El impacto de PROCHALATE en el sector agropecuario no está muy claro. Por una parte no se crearon, ni se fortalecieron suficientes mecanismos de comercialización para llevar la producción al mercado (MAG/PROCHALATE, 2000). Por otra parte, con respecto a la modificación e innovación de prácticas productivas, hay testimonios de un legado positivo respecto a cambios en las prácticas productivas y una mejora en el manejo de los recursos a nivel de finca y en la dieta familiar campesina (Torres, Balmore: entrevista, Cierra, Deysi: entrevista y Quiel, 2009). No obstante, hay dudas sobre su alcance y continuidad entre el conjunto de agricultores atendidos por el proyecto.²³

El legado de PROCHALATE se da en la formación de una base de institucionalidad territorial, precisamente por los procesos de organización, concertación multisectorial y participación ciudadana que ayudó a poner en marcha, desde el nivel comunal hasta el departamental. Apoyó la creación de comités comunales de protección ambiental y asociaciones de desarrollo comunal e impulsó la formación del Comité Ambiental de Chalatenango (CACH).

Posterior a estos grandes programas de reconstrucción, se han dado otros proyectos con incidencia más modesta en el fortalecimiento de la institucionalidad territorial igualmente orientados al desarrollo económico a partir de diversificación productiva, protección ambiental y fortalecimiento de instituciones de gestión terri-

²² PRODERE impulsa la formación de la Asociación para el Desarrollo Local (ADEL) un espacio intersectorial que está enfocado en la búsqueda de la autogestión económica. También apoya la formación del sistema de crédito COFICOL, que se transformó en la primera cooperativa de ahorro y crédito del Departamento (ACACRESCO) y las primeras Asociaciones Comunales de Pescadores (ACOPES). (Cartagena, 2010)

²³ Entre las limitaciones se mencionan la diferencia de enfoques en las acciones de extensión agropecuaria por parte de las organizaciones ejecutoras del proyecto, la resistencia de los productores hacia el ritmo de trabajo requerido para las innovaciones, la edad de los productores, falta de mano de obra familiar, influencia de los prestamistas locales en las prácticas en parcelas. (Quiel, 2009)

torial (mancomunidades) y cooperativas. (Cartagena, 2010)

Fortalecimiento municipal y formación de Mancomunidades

La redefinición del rol del Estado hacia un proceso de descentralización y/o desconcentración surge en el contexto de las políticas de ajuste estructural. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) impulsa el Programa de Desarrollo Local (PDL) fundamentado en la promoción de procesos de planeación participativa y en la descentralización del ciclo de proyectos en el ámbito municipal.

Inicialmente las acciones se orientaron al fortalecimiento de los gobiernos municipales. A mediados de los noventa comenzó a notarse otra dinámica con la conformación y desarrollo de asociaciones o mancomunidades de municipios. Las Mancomunidades despegaron con apoyo de la cooperación externa, pero su conformación no surgió súbitamente o de una decisión impuesta, sino que son el resultado de iniciativas que se sucedieron en el tiempo y que llevaron los alcaldes y concejos municipales a tomar la decisión de asociarse. Además, las primeras propuestas del Plan de Nación determinaron que la fragmentación municipal del país era uno de los obstáculos para el desarrollo local, proponiendo la fusión de los municipios más pequeños y con menor población.

Las mancomunidades empezaron a funcionar con proyectos de cooperación, además han contado con los aportes de las municipalidades que las integran, con fondos provenientes de la asignación del Gobierno Central. Para ampliar su rango de ejecución, realizan acuerdos formales o convenios con ONG locales.

La mejora de infraestructura y la preocupación ambiental han sido motores de integración de 3 mancomunidades de la zona de estudio: Man-

comunidad La Montañona, Asociación de Municipalidades de Servicios del Norte (AMUSNOR) y Mancomunidad Suchiltán. Aunque con escasos recursos, han construido sus propias estructuras e instrumentos de gestión territorial en la forma de planes de ordenamiento o reglamentos de protección de recursos. Las estructuras de organización local se han apropiado de su gestión, logrando ser un puente efectivo para vincular las políticas nacionales con la agenda endógena.

Política de desarrollo logístico e infraestructura: del FIS al Programa Zona Norte (FOMILENIO)

La construcción de infraestructura es la política gubernamental mejor delineada para Chalatenango durante los últimos 20 años, esto se observa en la continuidad del financiamiento para obras muy variadas y se remonta a la creación del Fondo de Inversión Social (FIS)²⁴ (Cartagena, 2010). Los gobiernos municipales han enfatizado la reparación de carreteras y –en menor medida– en escuelas, puestos de salud y sistemas de agua potable.²⁵ Esta tendencia ha variado poco. Desde 1992 hasta enero del año 2010 se han canalizado más de \$59.8 millones para infraestructura en el departamento de Chalatenango. (FISDL: 2010)

A finales de los noventa la política de reconstrucción da paso a una visión más estratégica de la zona Norte que identifica las principales potencialidades del territorio, recursos natura-

²⁴ La Secretaría de Reconstrucción Nacional y el FIS fueron fusionados en 1996 bajo el nombre del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

²⁵ Entre 1990 y 1995, el FIS canalizó \$10.8 millones para proyectos en Chalatenango. La mayoría de proyectos iban orientados a la construcción y equipamiento de escuelas y puestos de salud y a los proyectos de saneamiento, mientras el Programa MEA invirtió en Chalatenango unos 60 millones de colones (aproximadamente \$6.9 millones) entre 1992 y 1995. (Van der Borgh, 2003)

les y ruta de conectividad (Ver informe Etapa 2 A).

La CND recupera el proyecto de la Carretera Longitudinal del Norte (CLN) concebido en los años cincuenta y lo incorpora al conjunto de las propuestas del Plan de Nación que definió cinco territorios alrededor de sus distintas “vocalizaciones”. Chalatenango fue incorporado a la “Zona Norte”, reconociendo su papel en la sostenibilidad ambiental del país, como región proveedora de agua y energía, tal como lo había reivindicado CACH en el PADEMA. Sin embargo, la CLN le otorga al departamento una función que nunca estuvo en la agenda de los actores locales: servir de ruta de tránsito para el intercambio comercial en el Norte centroamericano.

La construcción de la CLN es financiada a través de los fondos de la Corporación del Reto del Milenio (MCC) como parte de un programa para “reducir la pobreza en la Zona Norte a través del crecimiento económico”, ejecutado por la organización FOMILENIO.²⁶ Este programa no está dirigido a fortalecer los medios de vida de las comunidades rurales más pobres y eso condiciona su efectividad en la Zona Norte. No aporta incentivos para aprovechar el conocimiento y experiencia acumulada por las organizaciones locales en el tema de diversificación agroecológica de fincas,²⁷ pues carece de estos enfoques o de seguridad alimentaria. Está pensado para que los grandes actores y beneficiarios de los recursos sean los empresarios e instituciones que promuevan iniciativas con

²⁶ El programa Zona Norte es ejecutado a través de la organización FOMILENIO y consta de tres componentes: desarrollo humano, desarrollo productivo y conectividad vial. En este proceso quedaron por fuera los componentes de protección ambiental y desarrollo urbano (Berti, 2010: entrevista).

²⁷ Por ejemplo, en el tema de frutales no se ve a los mismos como una opción de diversificación de la parcela campesina, sino que existe un sesgo a favor de la plantación de monocultivos. (Morales, 2010: entrevista)

eficiencia²⁸ y está abierto a la llegada de inversionistas externos al territorio, toda vez que las personas físicas o jurídicas objeto de crédito no están obligadas a tener su residencia en el Departamento de Chalatenango. (FOMILENIO, 2009)

La construcción de una agenda endógena para el desarrollo del territorio

Desde los últimos años del enfrentamiento armado se observó en el departamento de Chalatenango la aparición de estructuras de gestión del desarrollo basadas en la organización local de los pobladores. Estas organizaciones coinciden en una agenda propia de desarrollo autóctono que se expresa en tres ejes: a) El fortalecimiento y diversificación de la producción familiar; b) La construcción de la cultura organizativa de la población y c) La protección de recursos naturales claves para las estrategias de me-

La lógica que nosotros teníamos antes, con el PADEMA, es que somos una retaguardia del recurso hídrico... nosotros podíamos ser el pulmón de El Salvador, generar más recurso hídrico, mediante volver a hacer bosques en Chalate: no sólo de madera, frutales, cultivos. Dentro de la lógica de los cultivos agroecológicos, cultivos orgánicos. Definir áreas de ganadería... Y ser una alternativa de turismo. Turismo rural, de montaña. Eso bien o mal se tiene. Cuando nosotros hablábamos del desarrollo de Chalate no pensábamos en la (carretera) Longitudinal (Cierra, 2010: entrevista)

²⁸ Contempla un fideicomiso de 17 millones de dólares para canalizar apoyo técnico y financiero a emprendimientos en los sectores agropecuario, agroindustrial, lácteo, turismo y artesanías. El enfoque adoptado responde al modelo más tradicional de agro-negocios. Los créditos se otorgan por un valor mínimo de 50 mil dólares, a condición que la empresa beneficiaria aporte al menos un 20% del monto a invertir en el proyecto. (FOMILENIO, 2009)

dios de vida y el reconocimiento de estos como de importancia nacional. (Cartagena, 2010)

a) El fortalecimiento y diversificación de la producción familiar

En la reconstrucción posguerra, asegurar la alimentación de las poblaciones de repatriados y repobladores se convirtió en una prioridad para organizaciones como CCR, FUNPROCOOP, CORDES y el PRODERE (1990-1995). Sus acciones configuran una especie de política no oficial de seguridad alimentaria, la cual ha podido desplegarse aprovechando oportunidades abiertas por la cooperación internacional. Con el paso de los años se ha venido haciendo más integral, pues al propósito de asegurar la dieta básica se fueron sumando elementos de protección de suelos, diversificación, reducción de insumos químicos, mejor aprovechamiento del agua, etc.

Mientras que el gobierno salvadoreño carecía de una política de atención a la producción campesina, mucho menos contaba con una política de desarrollo rural, la llegada del PROCHALATE, el Programa Binacional o el PRE-MODER permitieron implementar algo parecido a una política de desarrollo rural, con la limitación de que no se trataba de una política de Estado.

En todo caso, es importante resaltar algunos elementos y logros de esta política “desde abajo” y “desde afuera”. Cabe destacar aquí los “planes de finca”.²⁹ PROCHALATE recogió el modelo de parcelas agro-ecológicas de CORDES y les llamó “planes de finca”, bajo los criterios de diversificación productiva en la parcela,

²⁹ La metodología del plan de finca busca que el productor planifique hacia dónde quiere llevar la finca o parcela: “El concepto es que hay que ordenar, hacer un escenario y trabajar en función de eso”. Se trata de una “estrategia de dinamización de la economía familiar y estrategia de conservación”. (Morán, 2010: entrevista)

obras de conservación del suelo y del agua y reducción de productos químicos (Morán, 2010 y Cierra, 2010). Este modelo ha demostrado reducir la vulnerabilidad de las familias campesinas ante hechos inesperados y desestabilizantes. Por ejemplo, cuando ocurrió el huracán Mitch “muchas gente tuvo efectos en el maíz y frijol, pero tenían producción de guineo. Lo que perdió lo niveló”. (Morales, Ernesto: entrevista)

Las iniciativas de diversificación productiva y seguridad alimentaria están vinculadas a una visión de sostenibilidad en el desarrollo social y económico del territorio. Ambas cuestiones — protección ambiental y desarrollo productivo — también son parte de la agenda de grupos comunales y gobiernos municipales, algunos de ellos sensibilizados en procesos que en su momento contaron con respaldo de PROCHALATE y, en alguna medida, el Programa Binacional.

b) La construcción de la cultura organizativa de la población

La cultura organizativa se ha construido a partir de la promoción y fortalecimiento de organizaciones comunales de base y ONG que nacen vinculadas a grupos de repobladores y repatriados. Por su parte, los programas de reconstrucción y desarrollo rural, como PROCHALATE, promovieron la formación de espacios de concertación entre el conjunto de actores en el territorio alrededor de temas específicos: actividades productivas, salud, educación, protección y manejo de recursos naturales, etc. También se dieron condiciones para la aparición de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) vinculadas a la vida municipal.

En este contexto, en 1995, emerge el Comité Ambiental de Chalatenango (CACH) una plataforma de intercambio y foro de coordinación entre las diferentes fuerzas políticas presentes en el territorio, quienes recuperan el tema am-

biental y la apropiación de los recursos del territorio como eje dinamizador del desarrollo. (Gómez y García, 2002)

El CACH forma un nuevo tipo de institucionalidad que posibilita la coordinación y enlace entre diversos niveles de participación en el territorio. A partir de la construcción de mecanismos de concertación, en poco tiempo logró poner en contacto a diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones estatales y comunales para coordinar acciones y encontrar soluciones a temas puntuales y urgentes para los pobladores.³⁰ Uno de los logros más notables y duraderos ha sido la cadena de acciones alrededor del macizo La Montaña, ³¹ que desembocarían en la conformación de la Mancomunidad La Montaña.

La etapa más activa del CACH se da entre 1995 y el 2004. El Comité se convierte en un interlocutor que canaliza inquietudes socioambientales frente al Gobierno Central, logrando poner algunos temas en la agenda nacional, entre estos la reivindicación del rol ambiental de la zona Norte como proveedora de servicios ecosistémicos. También ha aglutinado la resistencia del territorio ante macroproyectos como la represa hidroeléctrica El Cimarrón y la ex-

³⁰ Hacia el año 1997 se podía identificar unos ocho organismos involucrados plenamente (ADEL, CORDES, Diócesis de Chalatenango, FUNDAMUNI, FUNPROCOOP, ASECHA, DGRNR y PROCHALATE) mientras que otras nueve entidades que se sumaban de manera regular y unas veinticinco de manera esporádica, quienes realizaban aportes concretos o por lo menos participaban en intercambios de información. (FUNDE, 1997)

³¹ Fue en el marco de las reuniones del CACH como se reunieron los recursos de distintos actores para dar ayuda de emergencia a las familias de la Cooperativa Héroes del Volcancillo (que perdieron la cosecha de maíz 1995-1996), para la formación del CORBELAM y su Comisión Asesora, para el diseño del Plan de Manejo Forestal de La Montaña y para emprender acciones de sensibilización acerca de la importancia del macizo entre las alcaldías de 30 municipios aledaños. (FUNDE, 1997)

ploración minera. Bajo el paraguas del CACH se incubaron otros espacios multiactores para la gestión de ecosistemas, por ejemplo, el Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande (CIHCG) sobre el cual volveremos más adelante.

Entre 2005 y 2008 no se volvió a reunir el CACH, pero desde el 2009 se ha reactivado en el marco de nuevas posibilidades de relacionarse más estratégicamente con el Gobierno Central, sobretodo porque las nuevas políticas como la Estrategia Territorial para el Desarrollo Productivo y programas de combate a la pobreza que han priorizado a la zona Norte en la ejecución de actividades y proyectos.

c) La protección de recursos naturales claves para las estrategias de medios de vida y el reconocimiento de estos como de importancia nacional

La protección de recursos naturales, vinculados a la producción agropecuaria y la diversificación de los medios de vida de la población, ha sido uno de los ejes centrales de la acción colectiva del territorio. De allí que la recuperación y conservación de suelos y la protección de los recursos hídricos de los ecosistemas se hayan convertido en áreas de acción prioritaria. (Cartagena, 2010)

Una de las primeras acciones concertadas desde el CACH fue una campaña departamental sobre las condiciones de los recursos hídricos y los factores que influyen en su deterioro. Más adelante se logró articular una visión del desarrollo del territorio, presentado en el Plan Departamental de Manejo Ambiental (PADEMA) y desarrollado por los actores sociales de Chalatenango.

El PADEMA surgió de un proceso de diálogo impulsado desde el CACH, contiene lineamientos para una política ambiental y de desarrollo

sostenible. No era simplemente un "plan" de lo que se proyectaba a futuro, era también una forma de integrar esfuerzos que ya se estaban realizando en el territorio. Se trata de un esfuerzo de investigación social, económica y ambiental, consultado y validado ante la población y sus formas de representación comunitaria o gremial. Representa el proyecto de desarrollo del territorio a largo plazo y es un ejercicio inédito en la construcción de propuestas desde los actores sociales.

La estrategia territorial incluye "las potencialidades ambientales de Chalatenango y su relación con el resto del país como productor de servicios ambientales" (Gómez y García, 2002) integrando las discusiones dentro del CACH en torno al rol del departamento como proveedor y garante de servicios ambientales para el país.

Estas inquietudes nunca llegaron a producir una política, ni una propuesta de política que retribuya a Chalatenango por su papel en la protección de los servicios ecosistémicos. Pero al interior del territorio sí se logró aportar a la definición de una base institucional para la gestión ambiental. El PADEMA definió 26 micro regiones que recibieron el nombre de Unidades Ambientales de Producción y Manejo Sostenible (UAMPS) consideradas como espacios participativos de la población en torno a cuestiones de interés común para múltiples municipios. (CACH, 2003).

Por un tiempo funcionaron más de una docena de UAPMS, con grados distintos de empoderamiento y apropiación por parte de la población local, pero la implementación de las UAPMS requería más que voluntad y empoderamiento ciudadano. Sin fondos económicos, ni estructura institucional de base, la constitución de las UAMPS fue muy limitada y repercutió en la baja implementación del PADEMA al nivel de las microrregiones. (Cartagena, 2010)

Otra herencia del PADEMA y del CACH es la definición concertada de acciones y planes de manejo de diversos ecosistemas de importancia para los medios de vida locales y provisión de servicios ecosistémicos a las zonas urbanas. Este proceso está fundamentado en la existencia de altos niveles de cohesión en la red de actores del territorio, lo que pone de manifiesto espacios de alta identificación y solidaridad entre los actores (Escobar, 2010). En esta red destacan las coaliciones como CACH, el Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande (CIHCG) y la Asociación de Organizaciones de Cuenca de los Ríos Grande de Tilapa y Soyate (ASOCTISO). (Ver Informe Etapa 2A)

Las coaliciones CACH, CIHCG y ASOCTISO se han constituido como los actores con más relaciones de coordinación y cooperación, además, presentan alto grado de cercanía e influencia. Esto supone que dada su mayor capacidad de coordinación y cooperación, son los actores que tienen mayor acceso a los recursos sociales de la red territorial, ya que controlan mayor cantidad de información y tienen mayor oportunidad de influir o ser influidos por los actores que conforman la red. Además, dado su mayor grado de cercanía, presentan una mayor facilidad de acceso al resto de los miembros de la red, lo que se traduce en una mayor capacidad de recibir y enviar información. Por lo que son clave para las dinámicas de desarrollo territorial y la incidencia en políticas. (Díaz, Escobar y Gómez, 2010)

d) Principales implicaciones de la agenda endógena en la construcción de una cultura democrática y equitativa en términos de género

Las organizaciones multiactores como CACH, CIHCG y ASOCTISO desde un principio fueron espacios pensados para funcionar con una estructura de poder anti hegemónico y transversal, donde todos los participantes tuviesen voz

y voto. Incluso, parte de su éxito se atribuye al hecho de facilitar procesos participativos en el territorio. La idea de una participación más horizontal, abierta, democrática e inclusiva — que incluye una apertura a la dimensión de género— está definida en los principios de actuación de estos espacios, es parte del discurso de sus participantes y está presente en sus planes estratégicos y normativa de entendimiento.

En el caso del CACH, la visión del PADEMA destaca que los actores “construyen su desarrollo basado en la sostenibilidad ambiental, enmarcada en un contexto de libre participación con igualdad genérica”. Estas coaliciones reconocen la dimensión de género como algo presente en sus principios, pero no llegan a definir estrategias que permitan una mayor participación de mujeres en calidad y cantidad.

No existe información previa sobre la dimensión de género en las propuestas, acciones y discursos de estas coaliciones, en este apartado incorporamos algunos hallazgos basados en entrevistas realizadas a líderes hombres y mujeres de estas coaliciones. Las entrevistas buscaron entender el discurso manejado en torno al género, la percepción de las formas de participación de hombres y mujeres, así como algunas oportunidades y limitaciones para ampliar la participación de las mujeres en estos espacios.

Las ideas acerca de género que destacan los entrevistados contemplan los roles diferenciales de hombres y mujeres en la sociedad. Consideran que se trata de roles producto de una construcción social y reconocen el género como algo presente en todos los temas de desarrollo territorial: cultura, medio ambiente y economía. No obstante, no se puntualiza en cómo los roles de género influyen sus decisiones y prioridades en el desarrollo territorial. (Florian, 2010)

Las entrevistas también han identificado distintas formas de participación y asistencia en los

espacios multiactores, tales como: a) asistencia continua especialmente de miembros del comité directivo; b) los que llegan a las reuniones mensuales y c) quienes hablan y deciden mayormente en las reuniones. En todas estas formas, las mujeres participan poco. Como evidencia de lo anterior encontramos que en el caso del CIHCG el porcentaje de participación de hombres es del 65% y de mujeres, el 35%.

Especialmente para las mujeres, las limitaciones de participar en estos espacios están definidas por elementos socio culturales, como menor acceso al capital social y nivel educativo o sobrecarga con actividades reproductivas del hogar que condicionan tanto la voluntad como el tiempo. Según los actores “no hay oportunidades claras para que se destaquen las mujeres dentro de estos espacios” y por lo tanto aun “ellas no se proponen romper este hielo”. (Idem)

Otro elemento que incide en el desequilibrio de participación entre hombres y mujeres es la forma en que se define la convocatoria, que se dirige a tres públicos fundamentales: las organizaciones de desarrollo local, las organizaciones de productores y el nivel técnico — formado por organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales, especialmente a representantes locales de CENDEPESCA, MARN, CEL y Alcaldías. En el caso de las organizaciones de productores, como se refleja en los Talleres de Medios de Vida, la mayoría de las personas que se identifican como “productores” son hombres, especialmente pescadores y agricultores. Adicionalmente las esferas de poder institucional, tanto estatales como no gubernamentales suelen involucrar en su mayoría a hombres.

Los participantes en estos espacios reconocen que tampoco los temas abordados se han visto desde “el lente de género”, aunque dentro del CACH existen mesas de trabajo que se relacio-

nan con el tema de género; tales como la mesa de desarrollo humano y la mesa de reconversión económica. Desde la mesa de desarrollo humano se ha definido trabajar con énfasis en la población joven y mujeres. Para una de las líderes del CACH, una limitante es que “no hay instituciones que les interese trabajar la temática”. (Pocasangre, Cecilia: entrevista)

En compensación a la no existencia de estrategias formales para incentivar la incorporación de mujeres, se ha producido otro tipo de praxis no formal basada en la “solidaridad de género”, es decir, una articulación de redes sociales, que puede ser un aliciente a la mayor participación de mujeres en organizaciones tradicionalmente compuestas por hombres.

Pero estas estrategias pasan desapercibidas o son vistas como una curiosa excepción, lo mismo que los liderazgos femeninos dentro de las organizaciones. Desde el inicio del CACH hay presencia de mujeres que marcan liderazgo desde los espacios técnicos o comunitarios, incluso varias de ellas se funden en ambos espacios.³² Algunas han sido parte de organizaciones feministas o han sido capacitadas bajo el enfoque de género y desarrollo rural. Existe, además, la tendencia a una mayor participación activa de las mujeres jóvenes que puede aprovecharse hacia el futuro. En todo caso, mientras no se institucionalice la práctica de inclusión de género en la estrategia de trabajo de las coaliciones, estas potencialidades seguirán sin evolucionar hacia estructuras de representación más equitativas e inclusivas.

³² Nos referimos aquí a mujeres líderes como Deysi Cierra, Cecilia León y Cecilia Pocasangre, entre otras, que conjugan su rol como líderes comunitarios y su trabajo dentro de organizaciones locales como CACH, ASECHA, ASOCTISO y ACISAM. El liderazgo de mujeres es destacado en las actividades de conservación de cuencas y en las cooperativas que impulsan diversificación productiva como la producción de miel y hortalizas.

Sinergias entre agenda endógena y externa

Las acciones de las distintas organizaciones e instituciones en el territorio pueden agruparse en seis áreas:

- I. Apoyo a iniciativas productivas y protección de medios de vida.
- II. La protección de recursos naturales clave para las estrategias de medios de vida
- III. Fortalecimiento de la cultura y espacios de participación ciudadana para el desarrollo.
- IV. Políticas de fortalecimiento municipal y formación de Mancomunidades.
- V. Políticas de construcción de “infraestructura social”: transporte, educación, salud, agua potable, etc.
- VI. Definición de las funciones del territorio dentro de una estrategia de desarrollo de alcance nacional.

La agenda endógena hace énfasis en las áreas I, II, III y IV terreno que ha permitido coincidencias entre actores locales y externos al territorio, principalmente organizaciones locales de desarrollo y agencias de cooperación. Por ejemplo, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias y espacios de concertación, la canalización de demandas de la población ante los gobiernos locales y la creación de mancomunidades, fue favorecido por la presencia de PRODERE y PROCHALATE.

Las acciones en las cuatro áreas mencionadas configuran una política pública no oficial, “desde abajo”, que ha podido implementarse, de manera limitada, gracias al apoyo de la cooperación internacional. Desde “abajo”, porque han sido organizaciones de la sociedad civil

(CACH, CIHCG) las que han dado prioridad a las áreas mencionadas.

En el área de infraestructura, las organizaciones e instituciones locales han tenido poca participación (Cartagena 2010). La capacidad de diseño y gestión para proyectos de infraestructura en las municipalidades se limita a pequeñas obras. En el PADEMA, la construcción de infraestructura no ocupa un lugar destacado, pero sí lo tienen el desarrollo humano y la protección del medio ambiente.

Prioridades distintas se presentan en el Estado salvadoreño: las entidades estatales han financiado o gestionado los componentes de infraestructura en las áreas de salud, educación, conectividad, electrificación. En cambio, su capacidad de respuesta en temas como protección de los recursos naturales u ordenamiento territorial ha sido limitada.

Las opciones que afectan las funciones del territorio dentro de una estrategia de desarrollo de alcance nacional es el terreno donde más desencuentros se observa entre la agenda endógena y la agenda externa. Las propuestas del Plan de Nación para la Zona Norte retomaron la visión del territorio del PADEMA, pero al final sólo contó con apoyo político para gestionar un proyecto que da prioridad a la dotación de infraestructura. En todo caso, el Plan de Nación para la Zona Norte es lo más cercano a una política

de Estado sobre las funciones del territorio chalateco en el marco del desarrollo nacional.

El CACH ha visualizado al departamento como proveedor de servicios ambientales como agua y electricidad. La construcción de la carretera no lleva necesariamente a la desaparición de ese rol, pero le asigna al territorio una función adicional, ya que le convierte en una ruta de tránsito. La carretera genera rechazo en algunos actores de Chalatenango debido a su impacto ambiental y porque se teme que favorezca la penetración de negocios ajenos a la cultura local o la llegada de inversiones en minería de oro. Incluso para quienes no se expresan contrarios a la carretera, existen dudas sobre el beneficio que pueda traer al sector más pobre del campesinado.

La reactivación de las plataformas multiactores del CIHCG y el CACH tendrían que favorecer las capacidades de lograr acuerdos entre la agenda endógena y la agenda exógena, en este caso del Estado, toda vez que la nueva administración (2009-2014) se muestre más favorable a la concertación con los intereses de la sociedad civil en el territorio. El análisis de Redes Sociales muestra que tres instituciones del Estado – CEL, MARN y CENDEPESCA – tienen cierto nivel de cercanía con las organizaciones del territorio, principalmente a través de la participación en las plataformas multiactores.



De acuerdo al análisis realizado respondemos las hipótesis de investigación:

El modelo de desarrollo económico aplicado en El Salvador desde la década de los noventa ha tenido impactos positivos en el capital natural y ha favorecido las dinámicas ambientales y productivas del territorio, fortaleciendo las estrategias de vida de población y permitiendo reducir la pobreza e impactar positivamente en los ecosistemas.

Se rechaza la hipótesis. En términos generales, el Estado ha carecido de iniciativas de desarrollo productivo hacia el territorio, excepto en la dotación de infraestructura y equipamiento asociado a ciertos servicios: salud, educación, conectividad y electrificación. La mejora de los índices en este territorio se puede atribuir a mejoras en los servicios de salud y educación, pero no a una dinámica productiva o de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En tanto, las políticas para fortalecer los componentes de tipo productivo o ambiental han sido limitadas.

La reactivación económica de posguerra, en un territorio resquebrajado económicamente por la guerra y la crisis agrícola, se hizo sobre la base de la economía urbana y no sirvió para revertir dichas tendencias. Esto es el resultado de las políticas de liberalización económica, que se caracterizaron por un "sesgo pro financiero... anti agrícola y su falta de interés por incentivar las exportaciones no tradicionales de origen agrícola y en general por modernizar las zonas rurales del país". (Segovia, 2004)

Dichas políticas favorecieron el crédito en los sectores de la construcción y comercio, disminuyendo drásticamente la canalización del crédito hacia el sector agropecuario (PRISMA, 1995; Segovia, 2002). Además afectaron la institucionalidad encargada de canalizar los apoyos

a la agricultura, debilitando sustantivamente la capacidad del Estado para proveer asistencia técnica.

En el territorio, los efectos han sido una reducción drástica en el número de personas ocupadas en el sector agropecuario, pérdida de población y de la PEA en cuatro de los 8 municipios estudiados. También puede verificarse un incremento en las áreas dedicadas a la ganadería, en detrimento de las zonas de cultivos (Díaz, Escobar y Gómez, 2010). Como ha sido señalado por los ganaderos consultados en el Taller de Medios de Vida, la ganadería se desarrolla como una opción frente a las incertidumbres de la agricultura. Sin embargo, sólo una pequeña parte de los productores agropecuarios se están beneficiando de esta actividad, que por su falta de regulación incide negativamente en la degradación de la cobertura vegetal.

En términos generales, el Estado se ha desvinculado de los pequeños productores agrícolas; mientras que las ONG y la cooperación internacional han suplido la ausencia de políticas estatales orientadas a dicho sector. Después del ambicioso proyecto PROCHALATE, la atención a este grupo la han brindado algunas ONG, con sus limitados recursos. El modelo no ha contemplado un abordaje integral de desarrollo del territorio. El Plan de Nación para la Zona Norte es lo más cercano a una política de Estado sobre las funciones del territorio chalateco en el marco del desarrollo nacional, retomando la visión del territorio plasmada por los actores locales en el PADEMA. Sin embargo, al final sólo contó con apoyo político para gestionar un proyecto que le da prioridad a la construcción de una carretera cuya utilidad está en función de la economía urbana externa al territorio.

El capital social del territorio – expresado en sus capacidades organizativas, en las coaliciones sociales y en los arreglos institucionales existentes – no ha tenido la fuerza suficiente para incidir en las características y efectos de los mega-proyectos, de tal forma que éstos sean motores de una dinámica de crecimiento endógeno con inclusión social y sustentabilidad ambiental, porque no ha existido voluntad política, para institucionalizar las propuestas surgidas del territorio.

Replanteamiento: El territorio cuenta con un fuerte capital social, que se expresa en la capacidad organizativa especialmente de las coaliciones sociales y en los arreglos institucionales existentes. Sin embargo, estas coaliciones no han tenido la fuerza suficiente para incidir en la agenda de políticas definida exteriormente al territorio; de tal forma que estos sean motores de una dinámica de crecimiento endógeno con inclusión social y sustentabilidad ambiental, porque no ha existido voluntad política, para institucionalizar las propuestas surgidas del territorio.

Las coaliciones son la máxima representación de la capacidad del capital social territorial, articulan a diferentes sectores en función de intereses comunes, que se sobreponen a las diferencias ideológicas partidarias, aunque no las eliminan. Las coaliciones han abordado problemas críticos en torno a los medios de vida para asegurar la base de reproducción de una población que tenía que reinsertarse en un territorio afectado por la guerra y la desarticulación de los sistemas productivos tradicionales. Las coaliciones lograron canalizar fondos de cooperación y solidaridad, han sido contraparte de programas y proyectos territoriales; también han definido una visión de territorio que lo articula a la dinámica económica y ambiental nacional.

Sin embargo, no han logrado convertirse en interlocutores activos del Gobierno Central para plantear temas estratégicos de desarrollo

territorial. El Gobierno Central no ha definido una política de interacción con las bases sociales organizadas de carácter territorial, lo cual limitará a la larga la capacidad de construir visiones más estratégicas y consensuadas.

El territorio puede avanzar en el crecimiento económico, en la superación de la pobreza y en la distribución de los recursos, siempre y cuando los actores territoriales tengan mayor poder de decisión en las políticas y programas de desarrollo territorial. La inclusión activa de las coaliciones territoriales en las políticas de desarrollo productivo rural y desarrollo territorial puede fortalecer la agenda más operativa de las municipalidades y mancomunidades, pero estos son vínculos que aun necesitan reforzarse.

Las diferencias entre los territorios respecto a la distribución en los ingresos se explican por el éxito de la gestión municipal y las políticas y proyectos ejecutados en el territorio, independientemente del flujo de remesas y de su capital natural.

Si bien todos los municipios del territorio muestran un mejoramiento en el ingreso y la pobreza (w-w) solamente dos de ellos, Azacualpa y Santa Rita, habrían mejorado además las condiciones de distribución (w-w-w). El Cuadro 4, organiza los municipios de acuerdo a su desempeño respecto a los indicadores.

Santa Rita presenta la disminución de pobreza más importante en términos de puntos porcentuales, para colocarse como el municipio con el menor nivel de pobreza en el territorio. Le sigue Azacualpa y luego San Francisco Lempa. Este último municipio es donde se presenta el incremento más grande en el ingreso per cápita, seguido de Chalatenango. Por otra parte, en todos los municipios se verifica un aumento del coeficiente de Gini, pero los incrementos en Azacualpa y Santa Rita no son significativos. (Damianovic, 2009)

Cuadro 4

Ordenamiento de los municipios según desempeño en las variables indicadas.

Incremento ingresos (1992-2007)	Nivel de pobreza (2007)	Reducción pobreza (1992-2007)	Cambio GINI (1992-2007)
1.FL	1.RT,CH	1.RT,AZ,FL,RF	1.AZ,RT
2.CH,RF	2.AZ	2.CH,EP	2.LC,EP,FL,RF
3.RT	3.FL,RF	6.LC	CH,TJ.
4.TJ,AZ	4.EP	7.TJ	
5.EP	5.TJ,LC		
6.LC			

Notas:

1 = mejor posición con respecto al resto demunicipios.

AZ = Azacualpa, CH = Chalatenango, EP = El Paraíso, FL =San Fco. Lempa,

LC = San Luis del Carmen, RT = Santa Rita, RF = San Rafael, TJ= Tejutla.

Revisando los Casos de Santa Rita y Azacualpa entendemos las posibles combinaciones de indicadores que pueden incidir en esta clasificación positiva:

Azacualpa se destaca del resto del territorio en varias dimensiones, bajo nivel de analfabetismo (13%), buenos niveles de capacitación de la PEA y PEA agropecuaria con la proporción más alta de la PEA agrícola con acceso a la educación media. Lo anterior, es importante debido a que la PEA agrícola representa casi el 50%. La proporción de personas que reciben remesas es de las más elevadas del territorio (22.5%) y hay mayor inversión en infraestructura pública: escuelas, puestos de salud y electrificación.

Descatataca un cambio favorable en la relación PEA/Población, importante por sus implicaciones a los ingresos de los hogares que no sucedió en el resto de municipios. En Azacualpa, la población disminuyó un 26% mientras que la PEA tuvo una disminución neta de 18 % entre 1992 y 2007, por lo tanto es muy posible que el volumen de actividad económica haya disminuido. Pero de allí también resulta un incremento de 3 puntos porcentuales en relación PEA/población

La situación w-w-w en Santa Rita obedece a otras combinaciones de indicadores. Uno de ellos es la conectividad, que la cabecera muni-

cipal de Santa Rita ha tenido con el principal centro urbano de la zona, Chalatenango, y con el Área Metropolitana de San Salvador. El crecimiento de la PEA se da en la misma proporción que la población y también es uno de los municipios que captan más remesas (21.6%). El acceso de la población rural al recurso tierra en Santa Rita es el segundo más alto de la zona (44.4%), por detrás de San Francisco Lempa (56.2%).

Santa Rita no tiene inversión significativa reportada en fondos FISDL, pero presenta logros importantes en la dotación de infraestructura tales como caminos vecinales, sistemas de agua potable (Romero Gutiérrez: entrevista), posiblemente financiados con fondos distintos al FISDL. Un factor que no ha sido documentado a profundidad es el papel de las organizaciones vecinales y la capacidad de gestión del gobierno local de Santa Rita en la dotación de infraestructura y servicios sociales.

En conclusión, se rechaza la hipótesis; pues existen indicios de que el desempeño de Azacualpa y Santa Rita se relaciona con la recepción de remesas y el nivel de acceso al recurso tierra entre los productores agropecuarios. Sin embargo, mediante otras variables que no habrían sido consideradas y que son más evidentes en Azacualpa (relación PEA/Población, niveles de educación, inversión en infraestructura).

Referencias

- ANEP (2006). *Hacia una nueva estrategia de crecimiento económico*. Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE). San Salvador.
- BMI/Fortagro (2006). *Cadena Agroproductiva del Subsector Lácteos en El Salvador. Programa de Fortalecimiento de Cadenas Agroproductivas (FORTAGRO)*. El Salvador.
- CACH (2003). *Plan Estratégico 2003-2008*.
- CND (1998a) *Informe Chalatenango (síntesis)*. Mimeo, 18 de abril de 1998
- CND (1998b) *Síntesis de las Consultas Territorial e Intersectorial (Informe Preliminar)*. Mimeo
- CND (2008). *Propuestas para el desarrollo de la sub-región La Unión*. Plan de Nación. San Salvador
- CIHCG (2001). *Propuesta de manejo integrado de humedales Cerrón Grande*, Comisión Humedales Cerrón Grande.
- Damianović, Ninaska (2009). *Heterogeneidad espacial del desarrollo económico en El Salvador: radiografía de los cambios del bienestar en el período 1992-2007, por estimaciones de áreas pequeñas*, Convenio RIMISP-CEPAL, Santiago de Chile.
- DIGESTYC (2008). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2007*. Ministerio de Economía. San Salvador.
- Embalse de Cerrón Grande* (s.f.), en <http://ns1.oirsa.org,sv>
- FIAES (2010). *Ficha del proyecto "Recuperación, conservación y protección del área natural protegida Santa Bárbara y su zona de amortiguamiento"*, en <http://www.fiaes.org,sv>
- FISDL (2010). *Proyectos financiados por FISDL en el Departamento de Chalatenango desde 1992 a enero de 2010*. Tabla formato Excel (.xls).
- FLACSO Programa El Salvador (2005). *Mapa de Pobreza*. FLACSO/FISDL.
- FOMILENIO (2007). *Avances de FOMILENIO*. Presentación electrónica, en <http://www.fomilenio.gob,sv>
- FUNDALEMPA (1999). *Unidad Ambiental de Producción y Manejo Sostenible Santa Bárbara/El Paraíso*.
- FUNDE (1997). *Estudio de caso. Comité Ambiental de Chalatenango – CACH*. Mimeo, junio de 1997.
- GEF (2006). *Ficha del "Proyecto Piloto de uso Sustentable de Leña y Madera en 6 Comunidades en la Zona de Amortiguamiento al Área Natural Protegida Santa Bárbara"* (016/05/ELS/OP3/SGP).
- Gómez, Ileana y Margarita García (2002). *La gestión ambiental participativa en el norte de El Salvador: El caso del Comité Ambiental de Chalatenango*. Documento de Trabajo. PRISMA, San Salvador.
- Gómez Ileana, Margarita García y Silvia de Larios (2004). *La gestión ambiental participativa hacia la búsqueda de medios de vida sostenibles: el caso de la Mancomunidad La Montañona*, PRISMA, San Salvador.
- Henríquez, Luis (2007). *Diagnóstico participativo de las cuencas de los ríos Grande Tilapa y Soyate*, Proyecto Apoyo a la creación de organismos de cuenca en El Salvador, MARN/AECID.
- Henríquez, Luis (2008). *Información de la Asociación Organizaciones de Cuencas de los ríos Grande Tilapa y Soyate*, ASOCTISO, MARN/AECID, Chalatenango.
- INCAE-HIID (1999). *Centroamérica en el Siglo XXI: Una Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Bases para la discusión sobre el futuro de la región*. Alajuela, Costa Rica.

- Jiménez Pérez, Ignacio y Lino Sánchez Mármol (2004). *Embalse Cerrón Grande, Propuesta de Sitio Ramsar*, MARN-AECID, San Salvador.
- Laínez, Rosa América (2008). *Investigación Diagnóstica de Esfuerzos Microregionales de Departamento de Chalatenango*, ACISAM, Chalatenango.
- León, Cecilia (2008). *Información de La Asociación Organizaciones de Cuencas de los Ríos Grande de Tilapa y Soyate*, ASOCTISO-MARN.
- Lazarte, Alfredo; Hofmeijer, Hans y Maria Zwanenburg (1999.). *Local Economic Development in Central America: The PRODERE Experience*. ILO / OIT.
- Lungo, Mario y Francisco Oporto (1996). *La evolución de la red urbana y el desarrollo sostenible en El Salvador*. PRISMA, San Salvador.
- Morales Velado, Oscar (2009). *Sistematización y análisis del programa FOMILENIO*. PRISMA, San Salvador.
- MARN/AECID (2008). *Planes de Manejo de las microcuencas de los ríos Grande de Tilapa, Soyate y Área Protegida de Santa Bárbara*, MARN-AECID, Ana Luisa Dueñas, Coord., San Salvador.
- Millenium Challenge Corporation (2006). *Strategy for the Sustainable Development of the Northern Zone of El Salvador: Summary of the Proposal for Financial Support from the Millenium Challenge Corporation*, Mayo, <http://www.mca.gov.sv>
- Millennium Challenge Corporation. *Executive Summary: Millennium Challenge Compact with El Salvador*, <http://www.mcc.gov/mcc/countries/elsalvador/sv-documents/index.shtml>
- Mora, Jorge e Isabel Román (2004). *Experiencias de movilización social, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural en Mesoamérica*. Informe Final, RIMISP/IDRC-CRDI.
- PNUD (2003). *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003. Desafíos y Opciones en tiempos de globalización*, San Salvador.
- PNUD (2005). *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005 (IDHES). Una mirada al nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones*, San Salvador.
- PRISMA (1995). *Dinámica de la degradación ambiental*. El Salvador: PRISMA.
- PRISMA (2006). *La gestión participativa del agua en la Mancomunidad La Montañona*. El Salvador: PRISMA.
- PREMODER. *Proyectos ejecutados en siete municipios de Chalatenango localizados en el margen norte del embalse Cerrón Grande*.
- PROCHALATE (1995). *Estudio sobre la situación inicial de beneficiarios del proyecto PROCHALATE*. Diciembre de 1995.
- PRODERE (1995). *Chalatenango: Hacia el desarrollo humano. Sistemas locales de desarrollo/ PRODERE*. -- El Salvador: PRODERE; PNUD.
- Programa Binacional (2010). Sitio en Internet del Programa Binacional.
- UAPMS Lempa Sur (1999). *Unidad Ambiental de Producción y Manejo Sostenible Lempa Sur*. Mimeo.
- UICN (2006). *Algo más que historias: experiencias latinoamericanas en la gestión ambiental con enfoque de equidad de género de las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los ecosistemas de tierra seca*. Costa Rica: UICN, 2006.
- Quiel, Pedro (2009). Borrador de tesis "Vínculo técnico-productor en los proyectos de desarrollo rural: El caso del proyecto Prochalate (1994-2002) Chalatenango, El Salvador". Programa Centroamericano de Posgrado, FLACSO.
- Rosa, Herman (2008). *Perfiles y trayectorias del cambio económico en Centroamérica: Una mirada desde las fuentes generadoras de divisas*. PRISMA, San Salvador.
- Sanz, Nelson. *PROCHALATE. Estudio de caso. Proceso de cambios en la estructura organizativa del proyecto*. RUTA. Febrero de 2000.
- Segovia, Alexander (2002). *Transformación estructural y reforma económica en El Salvador*. Guatemala: F&G Editores.
- Segovia, Alexander (2004). "Centroamérica después del café: el fin del modelo agroexportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo económico". Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (San José, FLACSO), No.2, Vol. I, diciembre.

Wachowski. P. (2000). *Informe Final PROCHA-LATE ALA 92/45*.

Informes de la Investigación

Cartagena, Rafael (2010). *Análisis de la institucionalidad que incide en la dinámica social, económica y ambiental del territorio municipalidades de la ribera norte del Humedal Cerrón Grande*. Documento de Trabajo. PRISMA-RIMISP, San Salvador.

Díaz, Oscar, Escobar, Elias, Gómez, Ileana (2010), *La dinámica agroambiental de la zona norte del Humedal Cerrón Grande*, Documento de Trabajo PRISMA-RIMISP, San Salvador.

Escobar, Elias (2010). *Análisis de Actores Sociales de la Ribera Norte Humedal Cerrón Grande*. Informe. PRISMA San Salvador.

Florian, Maritza (2010). *Género y DTR en La Ribera Norte del Humedal Cerrón Grande (El Salvador)*. Documento de Trabajo, PRISMA-Universidad de Lund-RIMISP, San Salvador.

Informe Etapa 2 A. (2009). *Dinámicas Socio ambientales y Productivas en la Zona Norte de El Salvador: La ribera norte del Humedal Cerrón Grande*. PRISMA. San Salvador.

Entrevistas realizadas

Alas, Cándida. *Directora Instituto Nacional de Azacualpa*.

Aguilar, Bernardo. *Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), Agencia de Extensión de Chalatenango*.

Berti, Giovanni. *Ex-Director de Investigaciones y de Cooperación Internacional, Comisión Nacional de Desarrollo*.

Chavarría, Misael. *Centro Nacional de Desarrollo Pesquero, CENDEPESCA. Agencia El Paraíso*.

Cierra, Deysi. *Comité Ambiental de Chalatenango, CACH*.

Cruz, Abel. *ADESCO cantón El Llano y Concejo Municipal de Azacualpa*.

Erazo, Matías. *Comunidad Los Martínez*.

Fajardo, Jorge. *Programa Reducción de Vulnerabilidad y Degradación PREVDA-SICA*.

Funes, Jaime. *Asociación de Municipios del Norte, AMUSNOR, Chalatenango*.

Galdámez, Raúl. *Ministerio de Turismo, Oficina La Palma, Chalatenango*.

Henríquez, Luis. *Ministerio de Medio Ambiente, MARN*.

Jerónimo, Álvaro. *Facilitador, Unidad Técnica de Mancomunidad La Montañona*

Martínez, Pablo Antonio. *Alcalde Municipal de Azacualpa*.

Morales, Ernesto. *CORDES Chalatenango*.

Morán, Wilfredo. *Ex-Facilitador de CACH*.

López, Franklin. *Centro Nacional de Desarrollo Pesquero, CENDEPESCA*.

Rivas, Enrique. *Chemonics/FOMILENIO*.

Rivas, Rafael. *ASOCTISO*.

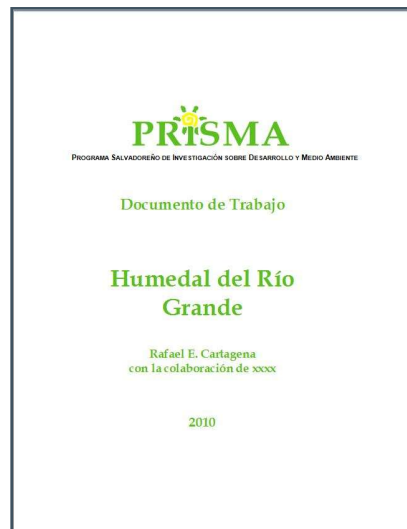
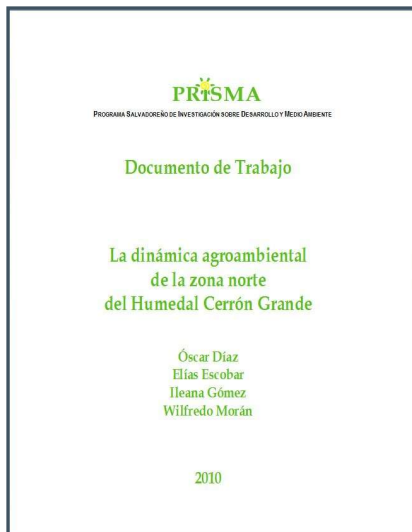
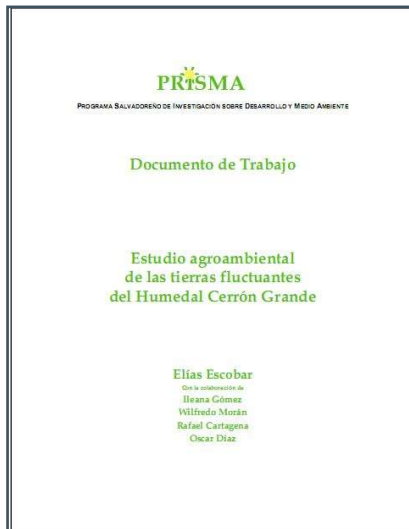
Romero Gutiérrez, Ismael. *Alcalde Municipal de Santa Rita*.

Pocasangre, Cecilia. *Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM*.

Serrano, Santiago. *Secretario General CCR*.

Torres, Balmore. *Asociación Ecológica de Chalatenango*.







www.prisma.org.sv

prisma@prisma.org.sv

3a. Calle Poniente No. 3760, Colonia Escalón, San Salvador

Tels.: (503) 2298 6852, (503) 2298 6853,
(503) 2224 3700

Fax: (503) 2223 7209

Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
Salvadoran Research Program on Development and Environment